

**ESTATUTOS DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE ALZIRA**

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación, naturaleza y ámbito territorial.

1. El Colegio de Abogados de Alzira es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Constitución, las normas básicas de la Ley estatal de Colegios profesionales y por la Ley de Colegios Profesionales de la Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige la citada normativa legal y demás de aplicación, por sus propios Estatutos y por los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y el Estatuto General de la Abogacía.

2. La competencia territorial del Colegio de Abogados de Alzira es el partido judicial de Alzira.

3. En caso de modificación futura de los Partidos Judiciales que afecte al actual de Alzira, el ámbito territorial del M.I. Colegio de Abogados de Alzira comprenderá en todo caso los municipios que actualmente forman parte del partido judicial y que se recogen en la Disposición Adicional Única de los presentes Estatutos.

Artículo 2. Domicilio.

El Colegio de Abogados de Alzira tiene su sede en Alzira, plaza del Sufragi, 9.

Artículo 3. Integrantes.

El Colegio de Abogados de Alzira se integra, sin limitación alguna, por quienes reuniendo las condiciones de aptitud y no estando incurso en ningún tipo de impedimentos, y previo cumplimiento de los requisitos hayan sido admitidos.

Artículo 4. Tratamiento y emblemas.

1. El Colegio de Abogados de Alzira, tendrá el tradicional tratamiento de Ilustre.

2. Su emblema tradicional está constituido por el escudo de armas de la ciudad de Alzira y con una filacteria que recorre ambos lados del escudo y su parte superior con la leyenda COLEGIO DE ABOGADOS DEL PDO. y, en la base, la palabra ALZIRA. Al tiempo que su emblema actual está consti-

tuido por el escudo de armas de la ciudad de Alzira enmarcado en la balanza de la justicia, incluyendo en su parte superior la leyenda Ilustre Colegio de Abogados y en la inferior Alzira. Pudiendo utilizarse indistintamente un emblema u otro. Sin perjuicio de ello la Junta de Gobierno del M.I. Colegio de Abogados podrá actualizar, y modificar dicho escudo, previa consulta a la Junta General de Colegio.

3. El Colegio se acoge al patrocinio secular de Santa María, en su Inmaculada Concepción.

TÍTULO II

FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO.

Artículo 5. Fines del Colegio.

Los fines del Colegio de Abogados de Alzira son los señalados con carácter general en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y, en particular, los siguientes:

- a) La ordenación del ejercicio de la profesión y su representación exclusiva.
- b) La defensa de los derechos e intereses profesionales y asistenciales de los colegiados.
- c) La formación profesional permanente de los colegiados.
- d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario, en garantía de la sociedad.
- e) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia.

Artículo 6. Funciones del Colegio.

Corresponde al Colegio de Abogados de Alzira para el cumplimiento de sus fines el ejercicio de las funciones que, con carácter general se indican en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y, en particular, los siguientes:

- a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de petición conforme a la Ley.
- b) Informar, con carácter preceptivo y no vinculante, los proyectos de Leyes que se presenten a las Corts y de normas del Consell en materia de derecho público y privado, y Administración de Justicia, que se refieran o afecten al Colegio y al ejercicio de la abogacía.
- c) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.

d) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas, así como en los organismos interprofesionales.

e) Asegurar la representación de la abogacía en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.

f) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos; crear, mantener y proponer a la autoridad competente la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.

g) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; elaborar sus Estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, sometiéndolos a la aprobación de la administración Pública de la Generalitat, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados; redactar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior, sin perjuicio de su control de legalidad por la administración Pública de la Generalitat, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

h) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento colectivo de la responsabilidad civil profesional.

i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.

j) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.

k) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.

l) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje.

m) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios,

mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.

n) Establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales y, en su caso, el régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes

o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su caso, servicios para su cobro.

p) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.

q) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la abogacía.

r) Participar en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de Abogado.

s) Las demás que vengan dispuestas por la legislación estatal o de la Comunitat Valenciana.

TÍTULO III COLEGIACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

CAPÍTULO PRIMERO ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO.

Artículo 7. Obligatoriedad de colegiación.

Para el ejercicio de la abogacía quienes tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio, deberán incorporarse al mismo, lo que les permitirá ejercer en todo el territorio español en los términos de la Ley estatal de Colegios Profesionales.

Artículo 8. Requisitos de Colegiación.

1. La incorporación al Colegio de Abogados de Alzira exigirá los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del ámbito territorial de aplicación de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo hecho en Oporto el 2 de mayo de 1992, (BOE 21/1994 de 25-01-1994) salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, o dispensa legal.

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

c) Poseer el título de Licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos.

d) Satisfacer la cuota de ingreso y las demás que tenga establecidas el Colegio.

2. La incorporación como ejerciente exigirá, además, los siguientes requisitos:

a) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la abogacía.

b) No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía.

c) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía Mutualidad de Previsión Social a prima fija o, en su caso, en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.

d) Declaración jurada del solicitante en la que manifestará si ejerce función o empleo en alguna de las Administraciones Públicas. En caso

afirmativo, expresará la naturaleza y categoría de su función o empleo y aportará certificación expresiva de que no incurre en incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.

e) Haber obtenido, cuando proceda, la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de Abogado.

Artículo 9. Requisitos a cumplimentar por los Abogados pertenecientes a otros colegios.

Sin perjuicio de que baste la colegiación en un solo Colegio, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Reino de España, quienes pretendan incorporarse al Colegio de Abogados de Alzira, si perteneciesen con anterioridad a otro, deberán presentar certificación del Consejo General de la Abogacía acreditativa de no figurar dado de baja por falta de pago en cualquier Colegio de Abogados de España y de no haber sido objeto de corrección disciplinaria con expresión precisa de cuál fue ésta en caso afirmativo.

Artículo 10. Autorización de incorporación.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de incorporación y reincorporación que se presenten, las cuales serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previas las diligencias e informes que proceda, mediante resolución motivada que deberá ser notificada al interesado en el plazo de diez días. Contra la resolución denegatoria o suspensiva de la solicitud de colegiación o reincorporación procederá el recurso de reposición ante la propia Junta de Gobierno, que deberá ser interpuesto en el plazo de un mes, debiendo ser resuelto en igual período. Contra el acuerdo definitivo podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados conforme a lo dispuesto en el artículo 113.

2. No podrá denegarse en ningún caso el ingreso en la corporación a quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Estatuto.

Artículo 11. Suspensión de solicitudes.

La tramitación de las solicitudes de incorporación y reincorporación será suspendida en los siguientes casos:

a) Si el solicitante no acompaña los documentos acreditativos de cumplir

los requisitos para su colegiación. La suspensión se levantará en el momento en que presente la totalidad de estos documentos.

b) Si, a juicio del Secretario, existiesen dudas respecto de la legitimidad o certeza de los documentos aportados mientras, no se disponga de las compulsas o legitimaciones oportunas.

Artículo 12. Causas de denegación.

Se denegarán las solicitudes de incorporación y reincorporación, si quienes las formulan se encontrasen comprendidos en alguno de los casos siguientes:

a) No cumplir los requisitos de incorporación o reincorporación establecidos en los presentes Estatutos.

b) Tener algún impedimento para ser admitido por no haber alcanzado la mayoría de edad, por no poseer la nacionalidad española, salvo en los casos de dispensa, o cuando se hubiere producido la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía, en virtud de Sentencia o Resolución firme.

c) Haber sido sancionado disciplinariamente con la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de algún Colegio de Abogado español o Corporación equivalente de algunos de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, no habiendo sido rehabilitado.

Artículo 13. Pago de cuota de incorporación.

1. El pago de la cuota de incorporación se realizará en el momento de solicitarla, pero con carácter condicional, sujeto a la autorización de la incorporación.

2. Si quien solicitase la incorporación lo estuviera en otro Colegio, la cuota de incorporación que deberá satisfacer será la misma que se exigirá en el Colegio de origen, a los Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Alzira, por régimen de reciprocidad.

Artículo 14. Colegiación única.

1. Los Abogados incorporados a otro Colegio de Abogados podrán ejercer en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Alzira, sin que se les pueda exigir por éste habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de las exigibles a sus colegiados por servicios que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Todo ello sin perjuicio del de-

ber de comunicación previa regulado en el artículo 15 de estos Estatutos.

2. Todo Abogado incorporado al Colegio de Alzira podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del Reino de España, en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y en los demás países del ámbito territorial de aplicación del citado Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeos con arreglo a la normativa vigente al respecto.

3. Los Abogados de otros países podrán ejercer en el territorio del Colegio de Alzira, de conformidad con la normativa vigente al efecto y con respeto a lo establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 15. Deber de comunicación.

1. El Abogado perteneciente al Colegio de Abogados de Alzira que vaya a intervenir en actuaciones judiciales que se desarrollen en partidos judiciales correspondientes al ámbito territorial de otros Colegios de Abogados, salvo que se trate de un Colegio de Abogados de la Comunitat Valenciana, deberá comunicarlo al Colegio en cuyo ámbito territorial haya de intervenir directamente y al Consejo General, a través del Colegio de Abogados de Alzira. El Abogado perteneciente a otro Colegio que realice una actuación profesional en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Alzira deberá comunicarlo a través de su Colegio. La comunicación surtirá efectos desde su presentación, sin perjuicio de que se recabe del Colegio de origen que el comunicante está incorporado al mismo y no está sancionado o incapacitado para el ejercicio profesional en ningún Colegio de España.

2. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro Colegio, el Abogado estará sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho Colegio protegerá su libertad e independencia en la defensa y será competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar, sin perjuicio de que la eventual sanción surta efectos en todos los Colegios de España, para lo cual se comunicará al Consejo General.

3. La incorporación o comunicación de actuación profesional acredita al Abogado como tal, sin que sea necesario ninguna designación o nombramiento del Poder Judicial o de la administración Pública.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y en los demás acuerdos intercolegiales que se puedan establecer.

CAPÍTULO SEGUNDO MIEMBROS DEL COLEGIO

Artículo 16. Miembros del Colegio.

1. Tendrán la consideración de miembros del Colegio de Abogados de Alzira, quienes, como ejercientes o no ejercientes, ya figuren incorporados o se incorporen en lo sucesivo, para lo cual deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos.

2. No podrá limitarse en el Colegio de Abogados de Alzira el número de sus componentes, ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados que reúnan las condiciones señaladas en estos Estatutos o preceptos que los desarrollen.

Artículo 17. Acreditación.

Los Colegiados identificarán su personalidad y su condición de ejercientes o no ejercientes, mediante un carné o tarjeta de identidad, en que figurará su fotografía, y que se ajustará al modelo que en cada caso acuerde la Junta de Gobierno. También podrán usar una insignia de solapa, según modelo igualmente aprobado por la Junta de Gobierno. Al tiempo que se utilizara dicho escudo en las togas, situando dicho escudo en la parte izquierda mediante bordado en color negro.

Artículo 18. Colegiados de honor.

Podrán ser Colegiados de Honor del Colegio de Alzira quienes reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la de Gobierno, en atención a méritos o servicios relevantes prestados a favor de la profesión o de la abogacía en general.

Artículo 19. Habilitación para defender asuntos propios o de parientes.

1. No se necesitará la incorporación al Colegio de Abogados de Alzira para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos por el artículo 8.1, párrafos a), b) y c) de los presentes Estatutos, así como aquellos que puedan establecer las normas vigentes.

2. Quienes se hallen en esta situación, serán habilitados por el Decano para la intervención que se solicite.

3 La habilitación supone para quien la recibe, el disfrute, en relación con el asunto o asuntos a que alcanza, de todos los derechos concedidos en general a los Abogados y la asunción de las correlativas obligaciones, y aplicación del régimen de incapacidad, prohibición, incompatibilidad y restricciones para el ejercicio de la profesión.

CAPÍTULO TERCERO

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO

Artículo 20. Pérdida de la condición de colegiado.

1. La condición de colegiado se perderá:

a) Por dejar de satisfacer tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que viniere obligado.

b) Por condena firme que lleve consigo la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

c) Por sanción firme de expulsión del colegio, acordada en expediente disciplinario.

d) A petición del interesado.

e) Por fallecimiento.

2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior deberán ser comunicadas por escrito al interesado, momento en que surtirán efectos, siendo igualmente comunicadas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.

3. En el caso del apartado a), los colegiados podrán reincorporarse al Colegio de Abogados de Alzira pagando lo adeudado, sus intereses al tipo legal del dinero, y la cantidad que corresponda como reincorporación.

4. La Junta de Gobierno acordará el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquella subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.

CAPÍTULO CUARTO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Sección Primera. De los Abogados incorporados a este Colegio

Artículo 21. Abogados

Tienen la condición de Abogados del Colegio de Abogados de Alzira quienes, en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional a la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, así como al asesoramiento y consejo jurídico.

Artículo 22. Juramento o Promesa.

1. De conformidad con la legislación vigente, quienes queden incorporados a este Colegio para el ejercicio de la profesión de Abogado y que con anterioridad no la hubiesen ejercido, prestarán juramento o promesa de lealtad a su Majestad el Rey y fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de Abogado.

2. El juramento o promesa será prestado ante la Junta de Gobierno del Colegio.

3. La Junta podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado de la prestación de dicho juramento o promesa. La falta de prestación del juramento o promesa el día y hora que al efecto se señale hará, salvo causa grave justificada, que quede en suspenso la anterior autorización hasta que efectivamente se cumpla este requisito, por quienes a ello vengán obligados.

Artículo 23. Justificación de su condición.

1. A través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de Alzira facilitará a los Jueces y Tribunales de la Comunitat Valenciana, así como a los directores de Centros Penitenciarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad una relación comprensiva de los Abogados ejercientes incorporados al Colegio. A los Abogados que en aquella estuviesen incluidos, no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión, salvo el de acreditación de su personalidad que, a efectos profesio-

onales, podrá realizarse mediante la exhibición del carné a que se refiere el artículo 17 de estos Estatutos.

2. Los Abogados que no figuren en la relación prevista en el apartado anterior, deberán acreditar la condición de Abogado mediante certificación de hallarse incorporados al Colegio o documentación acreditativa de haber efectuado la comunicación prevista en el artículo 15 de los presentes Estatutos.

3. El Colegio de Abogados de Alzira podrá comprobar que los Abogados que intervengan en las oficinas públicas y en actuaciones judiciales, se hallen en situación colegial regular conforme a lo previsto en estos Estatutos.

Sección Segunda. Incapacidad, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales.

Artículo 24. Circunstancias determinantes de la incapacidad.

1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la abogacía:

a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que, a los Abogados, se encomienda.

b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía en virtud de resolución judicial o corporativa firme.

c) Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de Abogados.

2. La incapacidad desaparecerá cuando cesen las causas que las hubieran motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme estos Estatutos.

Artículo 25. Prohibiciones.

Los Abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente:

a) Ejercer la abogacía estando incurso s en causa de incompatibilidad, inhabilitación o suspensión, así como prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como Abogados.

b) Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.

c) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía, atendiendo a este respecto a lo previsto en estos Estatutos y, singularmente, en el artículo 26.3.

Artículo 26. Incompatibilidades.

1. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. Igualmente, el Abogado perteneciente a este Colegio, que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad que, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios del correcto ejercicio contenidos en estos Estatutos, deberá abstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía.

2. Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con:

a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos en las Administraciones Públicas cuya propia normativa reguladora así lo especifique.

b) El ejercicio de la profesión de Procurador, Graduado Social, Agente de Negocios, Gestor Administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique.

c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la abogacía, que impidan el correcto ejercicio de la misma.

3. En todo caso, el Abogado no podrá realizar actividad de auditoria de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes. No se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con órganos de administración diferentes.

4. El ejercicio de la abogacía es también incompatible con la intervención ante los organismos jurisdiccionales, en los términos que establezca la legislación aplicable. El Abogado a quien afecte tal incompatibilidad, deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.

Artículo 27. Efectos.

1. El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior, deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de treinta días, con lo que automáticamente será dado de baja en el mismo.

2. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

CAPÍTULO QUINTO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS

Sección Primera. Con carácter general.

Artículo 28. Deberes fundamentales.

1. La actividad de Abogado se llevará a cabo con sujeción a las normas legales, estatutarias y deontológicas.

2. El Abogado, como partícipe en la función pública de la administración de Justicia, debe cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.

3. La defensa jurídica es una obligación profesional tanto para la abogacía, como para los Abogados, que se cumplirá ajustándose a normas deontológicas.

4. El Abogado tiene el derecho y el deber de prestar el servicio de Turno de Oficio en los términos que reglamentariamente establezca la Junta de Gobierno.

Artículo 29. Sometimiento a normas y decisiones del Colegio de Abogados de Alzira y demás órganos rectores de la Abogacía.

Los colegiados quedan sometidos al Estatuto General de la Abogacía, a los presentes Estatutos y a las decisiones de la Junta General, de la Junta de Gobierno y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, así como a los estatutos de este último.

Artículo 30. Despacho profesional.

1. Los Abogados de este Colegio deberán mantener despacho profesional abierto o estar adscritos a un despacho profesional, en el lugar donde habitualmente ejerzan la profesión, dentro del ámbito territorial de competencia de este Colegio. Se exceptúa de este deber de mantener despacho abierto a los Abogados procedentes de otros Colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido este requisito por el hecho de mantener estudio profesional en el Colegio de origen en el que más habitualmente ejerzan la profesión.

2. Todos los colegiados tienen la obligación de comunicar al Colegio los cambios de domicilio profesional, traslados de vecindad y ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos. Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de no haber comunicado su eventual traslado.

Artículo 31. Secreto profesional.

1. De conformidad con lo establecido por el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

2. En el caso de que el Decano del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuere requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial o gubernativa competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un Abogado del Colegio, éste deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.

Artículo 32. Libertad e independencia.

El Abogado en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sujetándose, por tanto, a la Ley y a las normas éticas y de deontología profesional.

Artículo 33. Ejercicio de su función.

El deber de defensa jurídica que a los Abogados se les confía es también un derecho para los mismos. En consecuencia podrá reclamar, tanto de las Autoridades, como del Colegio, y de los particulares todas las medidas de ayuda en el ejercicio de su función que les sean legalmente debidas.

Artículo 34. Consideraciones honoríficas.

El Abogado del Colegio de Alzira tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.

Artículo 35. Protección legal.

Para la protección de sus derechos, los colegiados podrán hacer uso de cuantos remedios o recursos establece la legislación, sujetándose al régimen jurídico vigente para cada uno de ellos.

Artículo 36. Derechos corporativos.

Son derechos de los colegiados:

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias. El voto de los ejercientes tendrá, en todo caso, doble valor que el de los colegiados no ejercientes.

b) Recabar y obtener del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y de todos los órganos corporativos, la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.

c) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en los que tengan la condición de interesado.

d) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos regulados en los presentes Estatutos.

e) Aquellos otros que les confieren los presentes Estatutos, los del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y cualesquiera otras disposiciones de carácter general.

Artículo 37. Deberes corporativos.

Son deberes de los colegiados:

a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General

de la Abogacía, en el marco de sus competencias respectivas.

b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación u omisión del deber de comunicación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.

c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un Abogado en el ejercicio de sus funciones.

d) No intentar la implicación del Abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.

e) Evitar competencias ilícitas respecto a los compañeros de la profesión, cumpliendo los deberes corporativos

f) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el Abogado o Abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo.

Artículo 38. Publicidad.

1. Los Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Alzira podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.

2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga:

- a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.
 - b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.
 - c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de Abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.
 - d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del Abogado.
 - e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio Abogado.
 - f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.
3. Los Abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas, deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales servicios, que no se ajuste a lo establecido en estos Estatutos y en el Estatuto General de la Abogacía.

Artículo 39. La venia.

1. Los Abogados tienen plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.
2. Los Abogados que hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto, encomendado a otro compañero en la misma instancia, deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior Abogado, y en todo caso, recabar del mismo la información necesaria para continuar el asunto.
3. La venia, excepto caso de urgencia a justificar, deberá ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el Letrado requerido pueda denegarla y con la obligación por su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa.
4. El Abogado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago.

Sección Segunda. En relación con los Tribunales.

Artículo 40. Normas para actuar ante los tribunales.

1. Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.

2. Los Abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia.

3. Los Abogados tendrán derecho a intervenir ante los Tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el Tribunal ante quien actúen.

4. El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio incorporado al Colegio de Abogados de Alzira, o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad.

5. Los Abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y ocuparán el sitio establecido para los Abogados.

6. Los Abogados no estarán obligados mas a que esperar un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que vayan a intervenir, transcurrido el cual, podrán formular la pertinente queja ante el mismo órgano e informar del retraso a la Junta de Gobierno del correspondiente Colegio, para que ésta pueda adoptar las iniciativas pertinentes.

Artículo 41. Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional

Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal bajo la fe del Secretario, o ante la autoridad bajo la fe del funcionario, preferentemente ante el que ejerciese la fe pública administrativa, y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.

Artículo 42. Necesidad de identificación.

1. En todo escrito que se dirija a los Juzgados y Tribunales y en el que sea preceptiva la firma de Abogado, así como en las copias para traslado a las partes, se hará constar de forma legible el nombre completo del Colegiado que lo suscriba y, en su caso, la fecha de la comunicación o habilitación prevista en los presentes Estatutos.

2. El Colegio de Abogados de Alzira podrá facilitar a sus Abogados el uso de un sello con el emblema del Colegio y el nombre y número de colegiado del Abogado, para facilitarle la identificación profesional y a estos únicos fines.

Sección Tercera. En relación con las partes.

Artículo 43. Respecto a su propio cliente

1. Son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia, guardando, especialmente, el deber de secreto profesional.

2. El Abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto, pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad.

3. En todo caso, el Abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.

4. Si al Abogado no le interesase continuar dirigiendo al cliente que le hubiere nombrado, vendrá obligado a hacerle saber la renuncia, con la antelación necesaria para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo. Comunicada la renuncia, el Abogado podrá depositar el documento acreditativo de la comunicación de misma y la documentación que le hubiese confiado al cliente en la sede del Colegio de Abogados, haciendo constar este extremo en la propia comunicación.

5. El Abogado está obligado a devolver puntualmente a su cliente la documentación que le hubiera confiado, a la terminación de la relación con-

tractual, sin perjuicio que pueda conservar copia de la misma. No será causa para eximirse de esta obligación que se le adeude cualquier cantidad. Deberá entregar a su cliente, a su petición, los documentos obtenidos por el Abogado, los escritos y resoluciones relacionadas con el asunto que le hubiese encomendado, todo ello con gastos a cargo del cliente. Este deber de conservación de documentos y antecedentes tendrá una duración máxima de seis años.

Artículo 44. Respetto a la parte contraria.

Son obligaciones del Abogado para con la parte contraria la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma, y el trato considerado y cortés.

Sección Cuarta. Ejercicio individual, despachos colectivos y no colectivos.

Artículo 45. Ejercicio individual.

1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho, o por cuenta ajena, o como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de Abogado que ejerce como titular de su propio despacho individual cuando:

a) El Abogado tenga en su bufete pasantes o colaboradores, con o sin relación laboral con los mismos.

b) El Abogado comparta el bufete con su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c) El Abogado comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros Abogados, pero manteniendo la independencia de sus bufetes, sin identificación conjunta de los mismos ante la clientela.

d) El Abogado concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros Abogados o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.

e) El Abogado constituya una sociedad unipersonal para dicho ejercicio de la abogacía, que habrá de observar, en cuanto pueda aplicársele, lo dispuesto en el artículo siguiente para el ejercicio colectivo.

2. El Abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir

frente a los mismos, si procediera. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, el titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los que encargue o delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto en contrario.

3. El ejercicio de la abogacía por cuenta ajena en régimen de especial colaboración habrá de pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.

4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito. En caso que las partes acuerden que el ejercicio profesional deba desarrollarse en régimen de exclusividad, deberá hacerse constar expresamente en el contrato. En cualquier caso, en el ejercicio profesional bajo esta modalidad, el Abogado tendrá derecho frente al empleador al respeto a la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión.

5. El Colegio de Abogados de Alzira podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en este Estatuto. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con el que colabore, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.

Artículo 46. Ejercicio colectivo.

1. Los Abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.

2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por Abogados en ejercicio, sin limitación de número. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los Abogados que integren el despacho colectivo.

3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en

el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los Abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.

4. Los Abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.

5. Los Abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atenderán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas.

6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial, respondiendo personalmente el Abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.

7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los Abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.

8. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.

9. Con la finalidad de determinar la responsabilidad de cada uno de los

Abogados miembros de un despacho colectivo, deberá establecerse entre las normas de funcionamiento del despacho el mecanismo para hacer constar ante terceros la distribución interna de asuntos. El Secretario del Colegio podrá diligenciar el documento o documentos en que se registren esta distribución de responsabilidades, si así lo solicitase el despacho.

10. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.

Artículo 47. Régimen de colaboración multiprofesional.

1. Los Abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.

b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la abogacía por los miembros Abogados.

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía, salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo, que no resultará aplicable, o en el apartado

5 del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.

2. Las agrupaciones en régimen de colaboración multiprofesional deben inscribirse en el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio.

3. Los miembros Abogados deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía.

CAPÍTULO SEXTO COLEGIADOS NO EJERCIENTES

Artículo 48. Colegiados no ejercientes

1. Pertenecen al Colegio de Abogados, en calidad de Colegiados no ejercientes, quienes ya figuren incorporados con tal condición o se incorporen en lo sucesivo siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8.1 de estos Estatutos.

2. Quienes pertenezcan a este Colegio en calidad de no ejercientes, tendrán los derechos que se reconocen en el artículo. 36, a) y b) y las obligaciones descritas en los artículos 28, 29 y 37, a y b), quedándoles prohibida la defensa de intereses jurídicos ajenos, y, en general, el ejercicio de las actividades que requieran la aplicación de técnica jurídica reservada a los Abogados.

TÍTULO IV
ABOGADOS PROCEDENTES DE OTRO
ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA
O DE ESTADOS DEL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO

CAPÍTULO PRIMERO
EJERCICIO EN ESPAÑA
CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE ORIGEN

Artículo 49. Ejercicio en el territorio del Colegio

1. Los Abogados pertenecientes a otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podrán ejercer en el territorio de competencia del Colegio de Abogados de Alzira, de conformidad con la legislación aplicable, quedando sujetos, en todo caso, a las mismas reglas profesionales y deontológicas que el resto de Abogados que ejerzan en este territorio.

2. Los Abogados procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de Estados incluidos en el Espacio Económico Europeo, cuyo domicilio profesional único o principal en el territorio español radique en el ámbito territorial de este Colegio, deberán inscribirse previamente en el registro especial constituido al efecto.

3. La solicitud de inscripción deberá realizarse cumplimentando el formulario facilitado por el propio Colegio, acompañando la documentación prevista en el artículo 5 del Real Decreto 936/2001 de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de Abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea (BOE 186/2001 de 04-08-2001), así como la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos. La cuota de incorporación que establezca la Junta de Gobierno, para los Abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que pretendan ejercer con el título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio no podrá ser superior, en ningún caso, a la exigida al resto de colegiados, y resultará adecuada al mantenimiento de las cargas colegiales en proporción a los servicios de los

cuales puedan beneficiarse estos Abogados. La Junta de Gobierno decidirá motivadamente sobre la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, transcurrido el cual se considerará admitida.

4. Los Abogados inscritos y no colegiados desarrollarán su profesión concertadamente con un Abogado colegiado en el Colegio de Alzira en las actividades de defensa del cliente, cuando en aplicación de la legislación española sea preceptiva la intervención de Abogado para las actuaciones ante Juzgados y Tribunales o ante organismos públicos con funciones jurisdiccionales, así como para la asistencia, comunicación y visitas con detenidos y presos. También será necesaria esta concertación cuando aun no siendo preceptiva la intervención de Abogado, la ley exija que si el interesado no interviene por sí mismo ante el órgano judicial, no pueda hacerlo otra persona que no sea Abogado. El Abogado con quien se actúe concertadamente responderá ante los órganos jurisdiccionales y organismos públicos

Artículo 50. Registro de Abogados inscritos.

1. El Colegio llevará un Registro especial de los Abogados de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que pretendan ejercer en el Reino de España. El Colegio, a través del Consejo Valenciano, comunicará al Consejo General de la Abogacía en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la inscripción, la misma, con especificación de la autoridad competente del Estado miembro de origen del interesado, al objeto de que el Consejo General en los quince días siguientes, informe de ello a dicha autoridad, así como al Ministerio de Justicia.

2. En la lista de los Abogados ejercientes incorporados al Colegio prevista en el artículo 23 de los presentes Estatutos, se incluirá los nombres de los Abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo inscritos, con especial mención de tal circunstancia, así como del país de obtención del título profesional bajo el que ejercen en España.

Artículo 51. Principio de asimilación del Abogado inscrito con el Abogado local.

1. En relación con las actividades que ejerzan con su título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio, los Abogados procedentes de otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo inscritos en

el presente Colegio, les será de aplicación, con carácter general, las mismas reglas profesionales y deontológicas que los Abogados incorporados a este Colegio. Todo ello, sin perjuicio de la normativa profesional y deontológica a la que estén sujetos en su Estado miembro de origen. En especial, quedarán sujetos a los mismos derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los presentes Estatutos, salvo las excepciones expresamente previstas en el Real Decreto 936/2001, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea (BOE 186/2001 de 04-08-2001).

2. La retirada, temporal o definitiva, de la autorización para ejercer la profesión en el Estado de origen, acordada por la autoridad competente de dicho Estado, conllevará para el Abogado inscrito la prohibición, temporal o definitiva, de ejercer en el ámbito territorial de este Colegio con el título profesional de origen.

Artículo 52. Obligación de ejercer con expresa mención del título profesional de origen.

1. Los Abogados que ejerzan en el ámbito territorial del presente Colegio con su título profesional de origen están obligados a hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 936/2001, quedando prohibida la denominación de Abogado expresada en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado miembro, o cuando así lo considere el Abogado inscrito, se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de actividad del Abogado inscrito, éste deberá añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.

Artículo 53. Responsabilidad disciplinaria.

1. Cuando un Abogado inscrito incumpla las obligaciones profesionales o deontológicas previstas en los presentes Estatutos, estará sujeto a la misma responsabilidad disciplinaria que el resto de colegiados del presente Colegio.

2. El expediente disciplinario se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos, con las siguientes especificaciones:

a) Con anterioridad a la incoación del correspondiente expediente disciplinario, el Colegio informará por el medio más rápido posible a la autoridad competente del Estado miembro de origen del Abogado inscrito, proporcionándole toda la información pertinente.

b) Sin perjuicio del poder de decisión que corresponde al Colegio, éste cooperará a lo largo de la tramitación con la autoridad competente del Estado miembro de origen, asegurando que dicha autoridad pueda formular alegaciones en las distintas fases e instancias de la tramitación, así como en los posibles recursos.

c) Si durante la tramitación del expediente disciplinario, la autoridad competente del Estado miembro comunica al Colegio que ha decidido retirar al Abogado temporal o definitivamente la autorización para el ejercicio de la profesión, el Colegio procederá, igualmente, a prohibirle temporal o definitivamente, el ejercicio en España bajo el título profesional de origen, sin perjuicio de la resolución que finalmente se dicte en el procedimiento disciplinario.

d) La resolución final del procedimiento disciplinario debidamente motivada, será comunicada inmediatamente por el Colegio a la autoridad competente del Estado de origen.

3. Las comunicaciones entre el Colegio y la autoridad competente del Estado de origen se realizarán con la intermediación del Consejo General de la Abogacía.

CAPÍTULO SEGUNDO INTEGRACIÓN EN LA PROFESIÓN

Artículo 54. Integración en la profesión.

1. Los Abogados que ejerzan en el ámbito territorial de este Colegio con su título profesional de origen y que hayan formalizado su inscripción conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, podrán solicitar y obtener la integración en la profesión, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de su título profesional regulado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto

1665/1991, de 25 de octubre de 1991 sobre reconocimiento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que exijan una formación superior mínima de tres años, en lo que afecta a las profesiones de Abogado y Procurador (BOE 112/1996 de 08-05-1996), siempre que acrediten una actividad efectiva y regular en España de una duración mínima de tres años, conforme al procedimiento establecido en los artículos siguientes.

2. Por actividad efectiva y regular se entenderá el ejercicio efectivo de la actividad profesional propia de la abogacía, sin otra interrupción que la que resulte de acontecimientos de la vida corriente.

Artículo 55. Procedimiento para la colegiación.

1. La solicitud deberá formularse ante la Junta de Gobierno del Colegio, acompañando los informes y documentación que considere pertinentes, relativos en particular al número y naturaleza de los asuntos que haya tratado.

2. Recibida toda la información el Colegio procederá a analizar y valorar toda la documentación que el solicitante haya presentado.

3. Con carácter previo a la adopción de la resolución que corresponda, el Colegio solicitará informe al Consejo General de la Abogacía Española. El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo de un mes.

Artículo 56. Resolución del procedimiento.

1. Transcurridos tres meses desde la solicitud de colegiación, la Junta de Gobierno adoptará la correspondiente resolución motivada concediendo o denegando la solicitud. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada conforme al artículo 119 de estos Estatutos. El contenido de la resolución podrá ser:

a) Desestimatorio, si se considera no acreditado un ejercicio efectivo y regular en España durante al menos tres años en los términos del artículo 17 del Real Decreto 936/2001, o por considerar que concurren motivos de orden público relacionados con procedimientos disciplinarios, quejas o incidentes de cualquier tipo.

b) Estimatorio de la solicitud lo que tendrá como consecuencia la integración del solicitante en la Abogacía española, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de título profesional mencionado en la

Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, por considerar que ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, en el ámbito del Derecho español, incluido el Derecho comunitario. Para hacer efectiva la mencionada integración el interesado deberá cumplimentar los oportunos trámites de colegiación previstos en los presentes Estatutos, siempre y cuando no hubieran sido ya exigidos en la inscripción, debiendo abonar, en su caso, como cuota de ingreso la que sea exigida al resto de colegiados, minorada con la cuota que pagó en su día para su inclusión en el registro de Abogados inscritos. Formalizada la colegiación, el interesado tendrá la condición de Abogado a todos los efectos, siéndole de aplicación sin limitación ni especialidad alguna los presentes Estatutos y las normas reguladoras de la profesión, y tendrá derecho a utilizar el título profesional de Abogado, añadiendo si lo desea mención del título profesional de origen. La resolución podrá acordar alternativamente que el solicitante se someta a una entrevista con la Comisión de Admisiones nombrada por la Junta de Gobierno y compuesta por tres de sus miembros, por considerar que no ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, pero de menor duración en materias relativas al Derecho español. En este supuesto la propia resolución fijará la fecha en la que el solicitante debe someterse a la entrevista que, en todo caso, deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación al solicitante de la resolución que acuerde la entrevista con la Comisión de Admisiones. También se le notificará la identidad de los miembros que integran la Comisión de Admisiones, pudiendo recusarlos si concurren las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Los Abogados con los que hubiere actuado concertadamente el Abogado inscrito o que hubieran pertenecido al mismo despacho profesional no podrán formar parte de la Comisión de Admisiones. La incomparecencia del solicitante a la entrevista supondrá automáticamente la denegación de la solicitud de integración en la profesión. Tras la celebración de la entrevista, cuya finalidad será verificar el carácter efectivo y regular de la actividad ejercida, y tras tomar en consideración toda la información y documentación aportada en relación con los asuntos tratados por el solicitante y en relación con sus conocimientos y experiencia profesional en Derecho español, así como en cuanto a su participación en cursos o seminarios relativos a dicho Derecho, incluidas las

normas deontológicas, la Comisión de admisiones propondrá en el plazo de 3 días a la Junta de Gobierno la resolución que proceda. La Junta de Gobierno decidirá finalmente bien autorizando la integración en la profesión sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento del título profesional, bien denegando dicha integración, con los efectos que en cada caso procedan.

2. La denegación de la solicitud no impide que el interesado pueda seguir ejerciendo en España bajo su condición de Abogado inscrito, pudiendo solicitar, en cualquier caso, el reconocimiento en España del título profesional de Abogado obtenido en el país de origen al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996.

Artículo 57. Plazo para resolver las solicitudes.

1. El plazo de tres meses previsto en los presentes estatutos para resolver las solicitudes de integración en la profesión, se suspenderá cuando el interesado no acompañe los documentos necesarios o existan dudas respecto a su legitimidad o certeza. Asimismo, se interrumpirá siempre que el procedimiento se paralice durante más de diez días por causas imputables al interesado.

2. Excepcionalmente, podrá acordarse mediante resolución motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse la ampliación del plazo, éste no podrá ser superior a 45 días.

3. Contra el acuerdo que acuerde la ampliación del plazo que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Artículo 58. Comunicación de la resolución adoptada y de las colegiaciones.

Una vez adoptada por el Colegio la Resolución que corresponda, se dará traslado de la misma al Consejo General de la Abogacía, al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a la autoridad competente del Estado de origen del interesado y al Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO TERCERO
ABOGADOS PERTENECIENTES AL COLEGIO
DE ALZIRA QUE EJERZAN PERMANENTEMENTE
CON TÍTULO ESPAÑOL EN OTROS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O EN OTROS
ESTADOS MIEMBROS DEL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO

Artículo 59. Autoridad competente para certificar la condición de Abogado.

La autoridad competente para certificar, ante las autoridades de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo la condición de Abogado ejerciente en el ámbito territorial del artículo 2 de estos estatutos será el Colegio de Abogados de Alzira.

Artículo 60. Información relativa a los Abogados con título español que se inscriban en otros Estados miembros.

1 Cuando un Abogado perteneciente a este Colegio se inscriba ante la autoridad competente de otro Estado miembro para ejercer en el mismo de forma permanente con tal título, será el Colegio de Abogados de Alzira el competente para recibir la comunicación que, al respecto, debe cursar la autoridad competente de dicho Estado miembro.

2. El Colegio de Abogados mantendrá actualizada una lista con los Abogados a los que se refiere el apartado anterior, al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información y colaboración establecidas en la Directiva 98/5/CE.

3 La lista a la que se refiere el apartado anterior será notificada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, al Consejo General y al Ministerio de Justicia.

Artículo 61. Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la normativa estatal, especialmente, el Real Decreto 936/2001.

TÍTULO V

TURNO DE OFICIO Y TURNO DE ASISTENCIA A DETENIDOS.

Artículo 62. Competencia.

1. Corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución

objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales. La Junta de Gobierno establecerá las normas para su reparto entre los Abogados que lo soliciten, así como los requisitos que deban cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo

2. Los Abogados desempeñarán las funciones a que se refiere el párrafo precedente con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, sin perjuicio de las limitaciones de la normativa que regula el derecho de asistencia jurídica gratuita. Corresponde a los Abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente y en los demás casos legalmente previstos.

3. Asimismo, corresponde a los Abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten la designación de Abogado de oficio o no designen Abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de Abogado para atender los asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.

4. Igualmente corresponde a los Abogados la asistencia a los detenidos y presos, en los términos que exprese la legislación vigente.

Artículo 63. Funcionamiento.

1. El desarrollo de dichas funciones será organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados de Alzira,

procediendo a la designación del Abogado que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y al establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, todo ello conforme a la legislación vigente.

2. La Administración Pública abonará la remuneración de los servicios que se presten en cumplimiento de lo establecido en este capítulo y podrá efectuar el seguimiento y control periódico del funcionamiento del servicio y de la aplicación de los fondos públicos a él destinados, en la forma legalmente establecida.

Artículo 64. Requisitos generales.

1. Con carácter general, los Abogados adscritos a los turnos de oficio o de defensa al detenido, deberán reunir en todo momento, las siguientes condiciones, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos y trámites que acuerde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira:

a) Estar incorporados como ejercientes en este Colegio, al tiempo de tener que comenzar y seguir sus actuaciones.

b) No estar sometido a expediente disciplinario ni haber sido sancionado corporativamente.

c) Tener cumplidas sus obligaciones económicas tanto respecto al Colegio de Abogados de Alzira como, en su caso, respecto a la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía o Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente y en general, estar al corriente en todo momento en sus obligaciones de contribuir al levantamiento de las cargas corporativas.

2. La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de Servicios a la Función Pública o Empresarial, estén sujetos al cumplimiento de un horario, que les imposibilite u obstaculice gravemente el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido, cuya atención ha de cuidarse en todo momento con el máximo celo y diligencia.

TÍTULO VI

HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 65. Derecho a su percepción.

1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado.

2. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el Abogado, con respeto a las normas deontológicas y de competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se tendrán en cuenta, como referencia, el Baremo de Honorarios Profesionales que tendrá carácter meramente orientativo aprobado por el Colegio de Abogados de Alzira o el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido. Los Honorarios Profesionales a cargo de la parte vencida en costas en un litigio se determinarán de acuerdo con las cantidades resultantes de aplicar estricta y exclusivamente el referido Baremo de Honorarios Profesionales.

3. La compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden las partes, que a falta de pacto expreso habrán de ser satisfechas efectivamente al Abogado.

4. Se prohíbe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el Abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto.

Artículo 66. Facultades de la Junta de Gobierno.

En relación con los honorarios profesionales, la Junta de Gobierno, podrá:

a) Publicar y revisar periódicamente el Baremo de Honorarios que tendrá el carácter meramente orientativos para la percepción de honorarios profesionales.

b) Realizar las funciones que le confiera el Reglamento regulador del servicio de cobro de honorarios, en los términos que apruebe la Junta general.

TÍTULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

Sección Primera. Principios Generales.

Artículo 67. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los colegiados ejercientes y no ejercientes, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.

2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los Abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.

3. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al Abogado se harán constar en su expediente personal, siempre que se refieran directamente a normas deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante la administración de Justicia. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.

Artículo 68. Competencia para su ejercicio.

1. La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:

a) Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión.

b) Se declarará previa la formación de expediente seguido por los trámites que se establecen en este Estatuto, según lo establecido en el artículo 88.2 del Estatuto General de la Abogacía.

2. Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:

a) Amonestación privada.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.

d) Expulsión del Colegio.

Artículo 69. De los procedimientos.

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán por acuerdo de la Junta de Gobierno.

2. Parea la realización de actos de información previa, el Decano nombrará a un miembro de la Junta de Gobierno que actuará como Ponente.

3. De conformidad con lo prevenido por el artículo 88.3 del Estatuto General de la Abogacía, corresponderá la instrucción de los procedimientos disciplinarios a la un Instructor, asistido por un Secretario, elegidos por la Junta de Gobierno entre los colegiados. No podrán ser nombrados para estas funciones ningún miembro de la Junta de Gobierno.

4. A la vista de lo actuado, el Instructor elevará a la Junta de Gobierno las propuestas de sanción o archivo de cada expediente disciplinario del mismo modo, el Instructor propondrá a la Junta de Gobierno las medidas de carácter provisional a adoptar en cada caso.

Sección Segunda. De las infracciones y sanciones.

Artículo 70. Clases de infracciones.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 71. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) La infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 25 o del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 26 de los presentes Estatutos.

b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de las normas especificadas en el artículo 38, y cualquier otra infracción que en los presentes Estatutos tuviere la calificación de infracción muy grave.

c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.

d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.

e) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión.

f) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas de los Colegios de Abogados.

g) La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido conforme al artículo 81.

h) El favorecimiento del intrusismo profesional y su encubrimiento.

i) La cooperación necesaria del Abogado con la empresa o persona a la que preste sus servicios, para que se apropien de honorarios profesionales abonados por terceros y que no le hubieren sido previamente satisfechos, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2 tales honorarios correspondan al Abogado.

j) La condena de un colegiado en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.

k) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.

Artículo 72. Faltas graves.

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales previstas en el artículo 37, párrafo a), salvo que constituya infracción de mayor gravedad.

b) El ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio omitiendo deliberadamente la comunicación conforme al artículo 15 de los presentes Estatutos.

c) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.

d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional, y la infracción de lo dispuesto en el artículo 39 sobre venia.

e) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de las normas de publicidad, cuando no constituya infracción muy grave.

f) La temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como la reiterada formulación de minutas de honorarios que sean excesivos.

g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.

h) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas tóxicas.

i) El ejercicio de la actividad profesional por los Abogados inscritos omitiendo expresa mención al título profesional de origen.

Artículo 73. Faltas leves.

Son infracciones leves:

a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.

b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.

c) El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.

d) Los actos u omisiones enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.

Artículo 74. Sanciones.

1 Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes:

a) Para las de los párrafos b), c), d), e), f), g), h), e i) del artículo 71, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.

b) Para las de los párrafos a), j) y k) del mismo artículo, expulsión del Colegio.

2. Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a tres meses.

3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o la de apercibimiento por escrito.

Sección Tercera. De los procedimientos.

Artículo 75. Procedimiento sancionador.

1. Del procedimiento para la sanción de infracciones leves. Si el acuer-

do de iniciación del procedimiento estableciese como posible calificación de una infracción como leve, se ofrecerá al inculpado el plazo de diez días para que alegue lo que tenga por conveniente, si de lo actuado el Instructor propusiese una sanción leve o el archivo de actuaciones, elevará tal propuesta a la Junta de Gobierno sin más trámite. La Junta de Gobierno acordará lo procedente.

2. Del procedimiento para la sanción de faltas graves o muy graves. Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, previa la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en este Estatuto con aplicación de lo establecido en el artículo 99.2 del Estatuto General de la Abogacía y estándose, en lo no previsto en éste, a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normativa de desarrollo. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penalmente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a este Estatuto sea racionalmente imposible, el procedimiento será suspendido en su tramitación. La reanudación del procedimiento disciplinario quedará demorada hasta que recaiga pronunciamiento firme de

la autoridad judicial. Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el Instructor aprecie que la presunta infracción pueda ser constitutiva de infracción penal por delito o falta, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Junta de Gobierno para que la misma decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y resuelva la suspensión del procedimiento hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial, en su caso. Reanudada la tramitación del expediente disciplinario en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento judicial.

3. Medidas de carácter provisional. En el acuerdo de iniciación o, con posterioridad a éste, a propuesta del Instructor, la Junta de Gobierno, con carácter motivado y previa audiencia al interesado, podrá adoptar las siguientes medidas de carácter provisional:

a) Suspensión en el ejercicio de la profesión. Esta medida será preceptiva

si el inculpado estuviese sujeto a Auto de procesamiento o a inculpación en un proceso penal. La suspensión provisional en el ejercicio de la profesión podrá prolongarse mientras dure el procesamiento o la inculpación, sin que afecte al mantenimiento de la misma la situación de suspensión del procedimiento prevista en el artículo anterior.

b) Suspensión en el servicio de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita, con el alcance que considere la Junta de Gobierno, cuando se entienda que la prosecución en dichos servicios pueda ser perjudicial para dicho servicio, atendiendo a los antecedentes obrantes en el expediente, a la gravedad de los hechos imputados, y a los precedentes del Abogado afectado. La suspensión provisional en los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita podrá prolongarse hasta que recaiga en el procedimiento Resolución que haya puesto fin a la vía administrativa y sea ejecutiva.

4. Notificaciones. Las notificaciones se ajustarán a lo establecido en los presentes Estatuto y en su defecto a lo prevenido en el artículo 94.2 del Estatuto General de la Abogacía que se remite para los casos, allí previstos a los artículos 59 y 61, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las notificaciones podrán practicarse en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al Colegio, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de estos Estatutos, con plena validez y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual traslado. Si no pudiere ser practicada la notificación en los términos previstos por los apartados 1 del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio con sujeción a lo señalado en los apartados 2 y 3 del expresado precepto; y si tampoco así pudiere practicarse, se procederá conforme al apartado 4, siendo preceptivo, además, la inserción de una anuncio en el tablón de edictos del Colegio. En las notificaciones que se practiquen por la vía del apartado 3 del artículo 59 de la citada Ley, se guardarán las formalidades que establece el artículo 61 de la misma norma.

5. Prórrogas de Plazo. Los plazos establecidos en el procedimiento disciplinario serán prorrogables, salvo disposición expresa en contrario, a propuesta razonada del Instructor del expediente, aprobada por la Junta de Gobierno, aprobación que deberá efectuarse en todo caso antes de su veni-

miento. El acuerdo sobre la prórroga, que se notificará al colegiado afectado o recurrente no será recurrible, sin perjuicio de que lo que pueda alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se interpongan contra la misma.

6. Resolución del procedimiento. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser acordada en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la propuesta del Instructor. Tendrá que ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. Los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta, de modo que el que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.

7. Régimen de impugnación. Serán impugnables ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados:

a). Los acuerdos de la Junta de Gobierno en cuya virtud, se adopten medidas provisionales, se archiven las actuaciones o se impongan sanciones disciplinarias.

b). Cualquier otra decisión dentro del procedimiento que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determine la imposibilidad de continuarlo o produzca indefensión.

El recurso podrá interponerse en el plazo improrrogable de un mes desde su notificación, mediante escrito a presentar ante la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo, en su caso, la Junta de Gobierno remitirlo en el plazo de diez días al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, junto con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

8. Ejecución y suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras. Las resoluciones de la Junta de Gobierno dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria propia no podrán ejecutarse hasta que hayan sido confirmadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados al resolver el recurso, o bien hasta que haya transcurrido el plazo establecido

para su interposición sin efectuarla. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción. Corresponde su ejecución a la Junta de Gobierno, quien podrá suspender la misma, de conformidad y en los términos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si se conociera la interposición de recurso de dicha naturaleza.

Artículo 76. Efectos, notificaciones y recursos contra las sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción.

2. Las sanciones podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza.

3. Todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Abogados de España, a cuyo fin el Colegio lo comunicará al Consejo General de la Abogacía para que proceda a comunicarlo a todos los Colegios.

Artículo 77. Caducidad del procedimiento sancionador.

1. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses en el supuesto de las faltas graves, muy graves y faltas leves desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad a la que se refiere el artículo 44.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La declaración de caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la infracción cometida no hubiera prescrito.

**CAPÍTULO SEGUNDO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
DE LOS ABOGADOS**

Artículo 78. Ámbito.

1. Los Abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

2. Los Abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio.

Artículo 79. Actuación profesional frente a un Abogado.

El Abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá informar al Decano del Colegio para que realice una labor de mediación, si la considera oportuna.

TÍTULO VIII
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
CAPÍTULO PRIMERO
LA JUNTA DE GOBIERNO

Sección Primera. Composición y funciones.

Artículo 80. Composición de la Junta de Gobierno

El Colegio de Abogados de Alzira estará regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por el Decano, un Tesorero, un Bibliotecario- Contador, un Secretario y tres Diputados.

Artículo 81. Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno.

1. Decano. Corresponde al Decano:

a) La representación institucional y oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los órganos constitucionales, los de la administración de Justicia, de las Administraciones Públicas, y cualquier otra persona física o jurídica;

b) El ejercicio las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su autoridad;

c) La presidencia las Juntas de Gobierno y las Juntas Generales, así como de todas las comisiones, Secciones y comités especiales a las que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.

d) La propuesta de los Abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.

e) Además de estas funciones, se esforzará principalmente en mantener con los todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, fomentando la cooperación y la competencia leal entre compañeros y la tutela del derecho de defensa frente a cualquier injerencia, limitación o restricción ilegítima.

2. Secretario: Corresponden al Secretario las funciones siguientes:

a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba el Decano y con la anticipación debida.

b) Redactar las Actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.

c) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, de-

biendo existir obligatoriamente aquél en el que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados, así como el Libro registro de títulos.

d) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

e) Expedir con el visto bueno del Decano las certificaciones que se soliciten por los interesados.

f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de Personal, y proponer la contratación y cese de los empleados del Colegio.

g) Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.

h) Revisar cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.

i) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.

3. Tesorero: Corresponderá al Tesorero:

a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.

b) Realizar los cobros y pagos derivados del presupuesto de ingresos y gastos anual y cuantos, en general, acuerde la Junta de Gobierno o procedan de acuerdos firmes adoptados por la Junta General.

c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.

d) Redactar y proponer el presupuesto de ingresos y gastos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.

e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con su sola firma o con las demás que acuerde la Junta de Gobierno.

f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.

g) Controlar la contabilidad y verificar la Caja.

h) Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.

4. Bibliotecario-Contador: Tendrá las obligaciones siguientes:

a) Cuidar de la Biblioteca

b) Formar y llevar catálogos de obras.

c) Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines corporativos.

d) Intervenir los pagos que realice el Tesorero por orden del Decano.

5. Diputados. Los Diputados actuarán como Vocales de la Junta, des-

empeñando las funciones de ésta que la propia Junta acuerde y las que los presentes Estatutos y las Leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados a fin de sustituir por orden numérico creciente al Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante, y en orden numérico decreciente al Secretario, Tesorero y Bibliotecario– Contador. Los Diputados llevarán a cabo los servicios que el Decano o la Junta de Gobierno les encomiende, y las sustituciones que les competan. Los Diputados desempeñarán, a título meramente enunciativo, las siguientes funciones, que por acuerdo de la Junta de Gobierno se asignara a los que en cada caso se estime más conveniente para su mejor desarrollo y eficacia:

a) Ejercer la inspección de cuanto afecte al intrusismo, en todas sus formas, e investigará si ejerce indebidamente la profesión, aquél en quien no concurren los requisitos legales.

b) Atender a las relaciones con los Tribunales, en cuantas incidencias se deriven del ejercicio de la profesión por los Colegiados, vigilando especialmente que se respeten cuantos derechos les correspondan y cumplan los deberes que la defensa y los estatutos les imponen, sobre todo a los encargados de los turnos de oficio y de asistencia a detenidos.

c) Cuidar de las relaciones del Colegio y de sus Colegiados, con la Mutu-
alidad General de Previsión de la Abogacía, y de las funciones propias de la labor asistencial que desarrolle el Colegio.

d) Organizar, vigilar y controlar el Turno de Oficio y de Asistencia a Detenidos.

Artículo 82. Tratamiento e insignias

1. El Decano tendrá el tratamiento de Excelentísimo, y otros que legalmente le correspondan.

El resto de miembros de la Junta de Gobierno tendrán tratamiento de Ilustrísimos.

2. El Decano y los miembros de la Junta de Gobierno, usarán en los actos oficiales, como distintivo de su personalidad, las medallas con cordón, colgadas al cuello, que tradicionalmente ya se vienen utilizando, así como Togas con el Escudo del Colegio, y puñetas en la bocamanga, pudiendo igualmente utilizar una medalla de solapa.

3. Las medallas con cordón, se utilizarán únicamente mientras se pertenezca a la Junta de Gobierno, pudiendo usarse las de solapa, en todo momento, incluso después de cesar en el cargo.

Artículo 83. Atribuciones de la Junta de Gobierno

Son atribuciones de la Junta de Gobierno todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones del Colegio, salvo las reservadas a la competencia exclusiva de la Junta General, y especialmente:

1. Con relación al ejercicio profesional y a los colegiados:

a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.

b) Resolver sobre la admisión de Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, así como resolver las solicitudes de inscripción e incorporación de los Abogados pertenecientes a la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, pudiendo delegar esta facultad en el Decano, para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.

c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y que en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.

d) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.

e) Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias o convenientes.

f) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.

h) Establecer las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los colegiados ejercientes, y las de los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.

i) Proponer a la Junta General, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados.

j) Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y del Consejo General de la Abogacía.

k). Regular los honorarios de los Abogados, que tendrán carácter mera-

mente orientativo, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo soliciten los colegiados minutantes.

l) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.

ll) Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

m) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.

n) Proponer los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, que precisaran la aprobación de la Junta General para su vigencia.

o) Nombrar las Comisiones, Agrupaciones y Secciones de colegiados que fueren necesarias para el estudio y desarrollo de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.

p) Crear, suprimir y regular las Secciones del Colegio y la Escuela de Práctica Jurídica.

t). Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal conforme a la legislación vigente.

u) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.

v). Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

x) Proponer a la Junta General normas de desarrollo o para la aplicación y cumplimiento de los presentes Estatutos

y) Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.

2. Con relación a los Tribunales de Justicia

a) Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y sus colegiados y la Magistratura.

b) Otorgar el amparo colegial ante los Juzgados y Tribunales

3. Con relación a los órganos constitucionales, de la Generalitat, así como de su Administración Pública, y de otras Administraciones Públicas

a) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el

desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.

b) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.

c) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.

4. Con relación a los recursos económicos del Colegio:

a) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, tanto generales como atribuidos o procedentes de las diversas Secciones incardinadas en el mismo.

b) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales. Para su redacción y distribución de las partidas que lo integren, se tendrá en cuenta la procedencia de los ingresos, en cuanto por su origen, deban ser aplicados, a fines específicos especialmente de tipo asistencial.

c) Acordar la inversión en inmuebles, con los límites que señala el art. 114 de los presentes Estatutos.

d) Proponer a la Junta General, la inversión o disposición del patrimonio colegial, cualesquiera que sea el origen de los mismos.

Artículo 84. Facultades especiales.

1. La Junta de Gobierno podrá emitir las consultas y dictámenes, así como arbitrajes y laudos corporativos, dentro de los términos autorizados por los apartados l), m), n) y o) del artículo 4) del Estatuto General de la Abogacía.

2. Los arbitrajes en materia de derecho privado se ajustarán a la ley vigente aplicable, previo su sometimiento al mismo por las partes.

3. Los laudos corporativos se tramitarán de acuerdo con las normas que en cada caso señale la Junta de Gobierno, quien podrá designar uno o varios ponentes que tramiten los mismos, resolviendo en todo caso previo oír por escrito a las partes y a la vista de los antecedentes que las mismas le suministren. Será necesario el sometimiento expreso de las partes al laudo corporativo.

4. La Junta de Gobierno determinará a quien corresponde abonar los honorarios que se devenguen por la emisión de los Arbitrajes y laudos corporativos, viniendo obligadas las partes a satisfacerlo de acuerdo con dicha

decisión, ingresándose los mismos o lo que se ingresen de análoga significación, en los fondos colegiales.

Sección Segunda. Funcionamiento.

Artículo 85. Reuniones de Junta

1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes previa convocatoria del Decano, quien deberá convocarla cuando lo solicite, al menos, una cuarta parte de sus integrantes.

2. La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario con, al menos, tres días de antelación. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente, que establecerá el Decano. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano considere de urgencia.

3. La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida cuando concurra la mayoría de sus miembros. No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida, aún sin convocatoria previa, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así se acuerde por unanimidad.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos favorables de los asistentes, teniendo el Decano voto de calidad, salvo cuando se requiera un quórum especial

Sección Tercera. Nombramiento y sustitución de los miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 86. Capacidad para formar parte de la Junta

1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:

a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.

b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por falta grave en cualquier Colegio de Abogados, mientras no haya sido rehabilitado.

c) Los colegiados que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.

d) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunal, Juzga-

dos u órganos que no sean Colegios de Abogados cuyas sanciones consten en su expediente personal, la Junta de Gobierno, mediante decisión motivada, decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.

2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados anteriores no podrán ser objeto de sufragio pasivo en las elecciones, y si son miembros de la Junta cesarán de inmediato.

Artículo 87. Forma de proveerse

1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, computándose el valor de los votos de aquellos como doble del de estos últimos.

2. Los cargos durarán cinco años.

3. La renovación de los cargos de la Junta de Gobierno se verificará por mitad, cada dos años y medio, con sujeción al siguiente turno de rotación:

a) Decano, Tesorero, Diputado 1º, Diputado 2, y en su caso, 3º.

b) Bibliotecario-Contador, Secretario, Diputado 2º y, en su caso, 4º.

4. Si se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá también por elección, en la Junta General de más próxima celebración y el elegido desempeñará su cargo por el tiempo que medie hasta la época de su renovación, según el turno establecido anteriormente. Los que fueren designados en esta elección para sustituir a aquellos que no hubieren agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos, tomando posesión inmediatamente.

Artículo 88. Requisitos para presentar candidatura

1. El Decano y los demás miembros de la Junta de Gobierno, serán colegiados ejercientes, que tengan la condición de elector y residentes en la demarcación del Colegio, y en el que no concurra ninguna de las causas de incapacidad ni en las prohibiciones establecidas en estos Estatutos.

2. No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos.

3. Para concurrir a las elecciones como candidato a Decano, será necesario haber desarrollado durante un año el ejercicio profesional, para los demás cargos tres años.

Artículo 89. Convocatoria

1. La Junta de Gobierno convocará elecciones, tres meses antes a la finalización del mandato ordinario o cuando se produjese alguna vacante en la misma.

2. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una Junta Provisional de entre los colegiados ejercientes con mas de 25 años de ejercicio, que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la convocatoria.

3. Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada. En el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato por un periodo de dos años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las sucesivas del modo que previene con carácter general esta sección.

Artículo 90. Procedimiento electoral: Fase previa a la elección

1. Publicación de las elecciones. Adoptado el acuerdo de convocatoria electoral, se insertará anuncio de la misma en el tablón de anuncios de la sede colegial, con cuarenta y cinco días de antelación a la fecha de celebración de la elección. En el anuncio deberá constar:

a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de situación colegial, exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.

b) Día y hora de celebración de la Junta y hora en que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto.

c) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por correo. Asimismo se expondrá en dichos tabloneros de anuncios las listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto, censo que quedará cerrado a fecha de los tres meses anteriores a la de la celebración de las elecciones.

2. Presentación de candidaturas. Las candidaturas deberán presentarse en

la Secretaría del Colegio con, al menos, treinta días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral. Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos. Ningún colegiado podrá ser candidato a más de un cargo.

3. Reclamaciones al contenido de las listas electorales. Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas, electorales habrán de verificarla dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas. La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas, dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante, dentro de los dos días siguientes.

4. Proclamación de candidatos. La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales y estatutarios exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Este acuerdo de publicará en el Tablón de anuncios del Colegio.

5. Voto por correo. Los colegiados que quieran ejercer el voto por correo deberán solicitarlo individualmente en comparecencia personal en las oficinas de la Sede Colegial hasta el decimoquinto día anterior a la fecha de la votación. El colegiado deberá acreditar su identidad mediante exhibición del DNI o del carné colegial. El Colegio registrará la petición de voto y tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se ejerza el derecho de voto personalmente. También, los Colegiados que por una imposibilidad física debidamente acreditada no puedan comparecer personalmente podrán otorgar poderes a otro colegiado para este trámite. En todo caso, la firma del Colegiado en el sobre exterior prevista en el apartado siguiente será insustituible. En el Colegio se entregará al solicitante del voto por correo un sobre blanco y un sobre exterior, en el que se hará constar en el anverso la palabra ELECCIONES y en el reverso su nombre y apellidos, dirección, número de colegiado y su firma, y la siguiente inscripción: «contiene papeletas para la elección de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira»

Artículo 91. Procedimiento electoral: Fase de elección

1. Constitución de la Mesa. Para la celebración de la elección, se constituirá la Mesa electoral que quedará integrada por el Decano como Presidente,

o por un miembro de la Junta que le sustituya en dicho acto auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia Junta como Vocales, actuando el mas moderno de éstos como Secretario, salvo que forme parte de la Mesa electoral el Secretario de la Junta de Gobierno, en cuyo caso desempeñara esta función. Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios interventores que lo representen en las operaciones de la elección.

2. Número de urnas. La Mesa Electoral establecerá urnas separadas para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes, sin perjuicio de la urna para voto por correo.

3. Duración. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas.

4. Papeletas. Las papeletas de voto, que serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas y del mismo tamaño, debiendo llevar impresos, por una sola cara y correlativamente, los cargos a cuya elección se procede. Los candidatos podrán, por su parte, confeccionar papeletas, las que deberán ser de igual formato, color y tamaño a las editadas por la Junta. En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de Gobierno de suficiente número de papeletas con los nombres de los candidatos en blanco y papeletas en blanco.

5. Acto de votación personal. Los votantes deberán acreditar a la mesa electoral su personalidad. El presidente de la Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones, pronunciará en alta voz el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá en la urna la papeleta doblada.

6. Voto por correo. La papeleta de votación deberá introducirse doblada en el sobre blanco que se cerrará y se introducirá a su vez junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el sobre exterior, que se remitirá por correo certificado a la sede del Colegio. Los votos por Correo deberán dirigirse al Secretario de la Junta de Gobierno que se hará cargo de su custodia hasta el momento del inicio de las elecciones, en que hará entrega de los mismos a la Mesa Electoral, que los introducirá en la urna designada a tal efecto. Se admitirán los votos por Correo que se reciban en la sede electoral hasta el momento del cierre de la votación. Una vez finalizadas las elecciones, se procederá en primer lugar a la apertura de la urna con los votos por correspondencia, procediendo a comprobar que los

datos y firma del elector que constan en el sobre exterior coinciden con la firma del Documento Nacional de Identidad que, preceptivamente, habrá adjuntado, en cuyo caso se introducirá la papeleta de nuevo en la urna, con su sobre. Será declarado nulo todo voto por Correo que no cumpla estrictamente la normativa prevista en estos Estatutos colegiales. Los colegiados que soliciten votar por Correo no podrán votar personalmente. Se levantará acta y lista de los sobres recibidos y sus votantes.

Artículo 92. Procedimiento electoral: Fase de escrutinio y proclamación

1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.

2. Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente en cuanto al cargo a que afecte, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurren a la elección. Podrá no obstante tacharse el nombre de un candidato e indicar de forma manuscrita el de otro que opte al mismo cargo. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.

3. Finalizado el escrutinio, el Presidente anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio.

4. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a la administración Pública de la Generalitat, e inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

Artículo 93. Procedimiento electoral: Efectos suspensivos de los recursos

Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado, ante la Junta de Gobierno del Colegio o ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, no suspenderán la votación, proclamación y po-

sesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa motivada.

Sección Cuarta. Ceses

Artículo 94. Cese.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

- a) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
- b) Por expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados, cese que no será efectivo hasta que tome posesión de dicho cargo quien lo sustituya.
- c) Renuncia del interesado.
- d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, o a alguna de las previstas en el párrafo tercero, del apartado 6 del artículo 75 de los presentes Estatutos.
- e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente capítulo.
- f) Fallecimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA JUNTA GENERAL

Sección Primera. Composición y funciones

Artículo 95. La Junta General

1. La Junta General es el órgano supremo de la voluntad, con arreglo a las disposiciones de este Estatuto y sin más limitaciones que las legalmente establecidas.

2. La Junta General está formada por los colegiados y los Abogados inscritos.

Artículo 96. Atribuciones de la Junta General.

Las atribuciones de la Junta General son:

- a) La aprobación y modificación de los Estatutos de este Colegio y de los

reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.

b) La aprobación del Balance, Cuenta de resultados y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos.

c) La aprobación o censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.

d) La fusión, segregación y disolución del Colegio, salvo en aquellos supuestos en que lo imponga directamente la Ley.

e) La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114.

1) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno.

Sección Segunda. Funcionamiento

Artículo 97. Convocatoria

1. La convocatoria la formulará el Decano, estableciendo el orden del día, el día, la hora y el lugar. Se incluirán en la convocatoria todos los asuntos que el Decano considere oportuno, así como todas las proposiciones de colegiados y Abogados inscritos se hayan presentado en la Secretaría hasta el día de la convocatoria, y sean competencia de la Junta General. Si a juicio del Decano no fuesen competencia de este órgano los someterá a consideración de la siguiente sesión de la Junta de Gobierno.

2. El Secretario con una antelación mínima de quince días a la celebración de la sesión de la Junta General, insertará anuncio de la convocatoria en el tablón del colegio y expedirá las citaciones. Las citaciones se comunicarán por vía telemática o mediante depósito en el apartado que cada colegiado tiene abierto en las dependencias colegiales.

3. Desde la fecha de inserción del anuncio en el tablón colegial, estarán a disposición de los colegiados y Abogados inscritos los expedientes en los que se recojan los antecedentes necesarios para que puedan formarse opinión sobre los asuntos a tratar en la sesión.

4. El Decano, previo acuerdo favorable de la Junta de Gobierno, puede convocar sesión urgente de la Junta General. En este caso, la antelación, con la que debe insertarse el anuncio y expedirse las citaciones, puede reducirse hasta cuarenta y ocho horas.

Artículo 98. Constitución

1. Las sesiones de la Junta General pueden ser ordinarias o extraordinarias.

2. Para la constitución de la Junta General, en sesión ordinaria, será necesaria la asistencia de la mitad más uno de los colegiados, en primera convocatoria, y cualquiera que sea el número de asistentes, en segunda convocatoria. La segunda convocatoria será siempre media hora después de la primera, debiendo expresarse esta regla en los anuncios y citaciones que expida el Secretario.

3. Para la constitución de la Junta General con carácter extraordinario, la constitución y régimen de primera y segunda convocatoria será el mismo, salvo que se traten los siguientes asuntos:

- a) Modificación de los estatutos.
- b) Moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros.
- c) Segregación o, en su caso, fusión o absorción.
- d) Disolución.

En los dos primeros casos, será necesaria la asistencia, en primera convocatoria, la asistencia de la mitad más uno de los colegiados y la presencia del veinticinco por ciento de los colegiados y Abogados inscritos, durante la deliberación y votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después, quedando constituida la Junta cualquiera que sea el número de colegiados que asista, debiendo expresarse esta regla en los anuncios y citaciones que expida el Secretario. En el tercer caso, deberá concurrir un número de colegiados no inferior al quince por ciento de los colegiados, tanto en la primera, como en la segunda convocatoria, así como su presencia durante la votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después. En caso de disolución, deberá concurrir un número de colegiados no inferior al ochenta por ciento, tanto en la primera, como en la segunda convocatoria, así como su presencia durante la votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después.

4. Las sesiones serán presididas por el Decano, o por quien legalmente le sustituya, siendo preceptiva la presencia de éste y la del Secretario o de quien legalmente le sustituya para la validez de la sesión sea ordinaria o extraordinaria.

Artículo 99. Deliberación

1. El Secretario, de orden del Decano, leerá el enunciado de cada asun-

to a tratar según conste en el Orden del día, a continuación, el miembro de la Junta de Gobierno que haya sido designado ponente del asunto, expondrá la motivación y la propuesta de acuerdo a adoptar. Si el asunto hubiese sido propuesto por un colegiado y no se hubiese designado ponente, será a este a quien le corresponderá la exposición y propuesta.

2. El Decano abrirá el debate otorgando la palabra, por una vez, a quienes se lo soliciten, pudiendo establecer las limitaciones temporales que considere oportunas. Asimismo podrá conceder un segundo turno de intervención a los colegiados para rectificar su posición inicial, y las intervenciones que considere convenientes por alusiones.

3. Finalizadas las intervenciones, el Decano someterá el asunto a votación, en los términos de la propuesta de acuerdo, o de las alternativas que se planteen a la misma.

Artículo 100. Votación.

1. Las votaciones serán ordinarias a mano alzada, o nominales. Sólo serán nominales cuando lo determine el Decano o cuando lo soliciten al menos el diez por ciento de los asistentes. También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta, mediante papeletas en sobres, que así lo aseguren, cuando lo solicite un 10 por ciento de los asistentes.

2. En ningún caso será delegable el voto.

3. Para la adopción de acuerdos en las sesiones ordinarias será suficiente que existan más votos a favor que en contra de la propuesta de acuerdo, pudiéndose, también, adoptar acuerdos por aclamación.

4. Para la adopción de acuerdos en las sesiones extraordinarias será suficiente que existan más votos a favor que en contra de la propuesta de acuerdo, salvo en los siguientes casos:

a) Moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, para cuya aprobación será necesario el voto favorable de dos tercios de los asistentes.

b) En los de segregación o, en su caso, fusión o absorción, que será necesario el voto favorable de la mitad mas uno de los asistentes.

c) Disolución, que será necesario el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes.

Artículo 101. Sesiones ordinarias

1. La Junta General se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año, no pudiéndose tratar en la misma ningún asunto que requiera una mayoría especial para su constitución.

2. La primera de las sesiones de carácter ordinario se celebrará durante el primer trimestre del año natural, en el que se tratarán, al menos, los siguientes asuntos:

a) Informe por el Decano de su gestión y de la Junta de Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.

b) Lectura, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.

c) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquéllos a quienes corresponde cesar.

d) Ruegos y preguntas

3. La segunda Junta General Ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, que necesariamente al menos tratara del siguiente orden del día:

a) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.

b) Ruegos y preguntas.

Artículo 102. Sesiones extraordinarias

1. La Junta General se reunirá con carácter extraordinario, cuando así lo acuerde el Decano, por propia iniciativa, a propuesta de Junta de Gobierno o del diez por ciento de los colegiados, y siempre que sea preceptiva una mayoría especial para su constitución y para la adopción de acuerdos.

2. En las propuestas se expresarán los asuntos concretos que hayan de tratarse en la sesión.

3. La sesión se convocará dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la propuesta en el Registro de Entrada del Colegio o de la adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno.

TÍTULO IX

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA.

Artículo 103. Carácter y finalidad

1. La Escuela de Practica Jurídica es un órgano desconcentrado del Colegio, que tiene por objetivo principal la formación deontológica y práctica para el ejercicio profesional, facilitando al Abogado en sus inicios profesionales las herramientas y recursos prácticos necesarios para capacitarlo en habilidades destrezas, actitudes y conocimientos imprescindibles para iniciarse en el ejercicio profesional con eficacia, responsabilidad, seguridad y respeto a las normas deontológicas, así como para capacitarlo específicamente para su inmediata incorporación a los servicios de turno de oficio, de asistencia al detenido y de orientación jurídica, una vez cumpla el resto de los requisitos exigidos reglamentariamente.

2. A través de la Escuela de Practica Jurídica del Colegio de Abogados de Alzira desarrollara la función de participación en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional.

3. La organización y funcionamiento de la Escuela de Práctica Jurídica se regulará por la Junta de Gobierno.

TÍTULO X

CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Artículo 104. Integración.

El Ilustre Colegio de Abogados de Alzira está integrado en el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Esta integración no afecta ni a personalidad propia e independiente de esta organización, ni al ejercicio de las competencias del Colegio.

TÍTULO XI
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS
Y DE SU IMPUGNACIÓN.
CAPÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN JURÍDICO Y ESPECIALIDADES
PROCEDIMENTALES

Artículo 105. Régimen Jurídico

El Colegio de Abogados de Alzira, como Corporación de Derecho Público, está sujeto al Derecho administrativo, en cuanto ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en estos Estatutos.

Artículo 106. Presunción de validez y ejecutoriedad de los actos sujetos a Derecho Administrativo

Los actos dictados por los órganos colegiales sujetos al Derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación.

Artículo 107. Especialidades procedimentales

1. Representación: Los colegiados podrán actuar por medio de representante, que deberá ser otro colegiado, que acreditará su mandato mediante documento público o poder apud acta, entendiéndose con éste las actuaciones que practique el Colegio cuando así lo solicite el mismo interesado.

2. Plazo de resolución. El plazo máximo de Resolución y notificación de los procedimientos iniciados a instancia de interesado será de cuatro meses. Para los procedimientos iniciados de oficio, incluyendo los disciplinarios, será de seis meses.

3. Recepción y registro de documentos: En el Colegio se llevará un único Registro en el que se hará el correspondiente asiento de todo recurso, escrito o comunicación que presenten los colegiados.

Artículo 108. Libros de Actas

Los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno se transcribirán, separadamente, en dos libros que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevarán en el Colegio. Serán firmadas por el Decano y por el Secretario o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Junta de que se trate.

CAPÍTULO SEGUNDO RECURSOS

Artículo 109. Contra acuerdo de la Junta de Gobierno.

1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, podrán ser objeto de recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquél en que se hubiera adoptado o, en su caso, notificado, a los colegiados o personas a quienes afecte.

2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o ante la Junta de Gobierno, que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Valenciano, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.

3 La interposición del recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.

b) Cuando a instancia de parte así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños difícilmente reparables o, desproporcionados respecto al interés público tutelado por el acto. La interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.

Artículo 110. Contra acuerdos de Junta General.

1. Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.

2. Si la Junta de Gobierno al impugnar un acuerdo de la Junta General, en-

tendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico podrá, al tiempo de formular el recurso previsto en el apartado anterior, solicitar la suspensión inmediatamente la ejecución del acuerdo impugnado.

TÍTULO XII
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
DEL COLEGIO.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS RECURSOS

Artículo 111. Recursos ordinarios.

1. Constituyen los recursos ordinarios del Colegio de Abogados:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.

b) Las cuotas de incorporación al Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.

c) Los derechos por los informes, dictámenes o resoluciones que evacue la Junta de Gobierno en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales, en la cuantía que establezca la Junta de Gobierno.

d) Los derechos por los dictámenes, resoluciones o arbitrajes que se sometan a la Junta de Gobierno, los cuales se fijarán discrecionalmente conforme a las normas generales de honorarios vigentes en cada momento.

e) El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias a abonar por los colegiados, que se fijarán por la Junta de Gobierno.

f) Los derechos por expedición de certificaciones, visados, registro, envío o inscripción de documento, así como la prestación de cualquier otro servicio o entrega de bienes.

g) Las rentas procedentes de la inversión de los remanentes de ejercicios anteriores, si los hubiere.

h) Los ingresos por la promoción entre los colegiados de servicios y actividades desarrolladas por terceros.

i) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la Junta de Gobierno establezca reglamentariamente.

j) Cualquier otro ingreso por concepto que legalmente proceda.

2. Las rentas o ingresos que por su origen o procedencia deban ser asignadas a fines específicos, se aplicarán al cumplimiento de los mismos.

Artículo 112. Recursos extraordinarios

Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de Abogados:

- a) Las subvenciones de Administraciones Públicas, las donaciones otras personas físicas y jurídicas, así como las herencias y legados de particulares.
- b) Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.
- c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
- d) Cualquier otro que legalmente proceda.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA CUSTODIA, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 113. Administración

1. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno.
2. Las orden de de pago serán expedidas por el Decano y ejecutadas por el Tesorero.

Artículo 114. Reglas Generales

1. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de máxima garantía, salvo que la Junta de Gobierno acuerde su inversión en inmuebles o en otros bienes.
2. La Junta de Gobierno precisará acuerdo de la Junta General para aquellas inversiones que superen el 15% del activo del Colegio, excluido el inmovilizado, y cuando cuyo porcentaje supere a su vez el 15% de los ingresos presupuestados del ejercicio.
3. Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos del depósito se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.

TÍTULO XIII FUSIÓN, ABSORCIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN.

Artículo 115. Fusión, absorción y segregación.

El Colegio de Abogados de Alzira podrá fusionarse, absorber o segregarse por acuerdo de la Junta General, con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Artículo 116. Disolución

El Colegio de Abogados de Alzira solo podrá disolverse mediante cuando así lo imponga directamente la Ley o mediante acuerdo adoptado en Junta General, con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA

El Partido Judicial de Alzira comprende los siguientes municipios: Alberic, Alcántara del Xúquer, Algemesí, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Cotes, Énova, Gavarda, Guadasuar, Manuel, Masalavés, La Pobla Llarga, Rafalguaraf, San Juan de Énova, Sellent, Senyera, Sumacárcer, Tous, y Villanueva de Castellón. El ámbito territorial del M.I. Colegio de Abogados de Alzira debe coincidir con el ámbito del partido judicial.

TÍTOL XIII FUSIÓ, ABSORCIÓ, SEGREGACIÓ I DISSOLUCIÓ.

Article 115. Fusió, absorció i segregació

El Col·legi d'Advocats d'Alzira podrà fusionar-se, absorbir o segregar-se per acord de la Junta General, amb els requisits legals i estatutaris establits a aquest efecte.

Article 116. Dissolució

El Col·legi d'Advocats d'Alzira només podrà dissoldre's quan Així ho impose directament la llei o mitjançant un acord adoptat en Junta General, amb els requisits legals i estatutaris establits a aquest efecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

El Partit Judicial d'Alzira comprén els municipis següents: Alberic, Alcàntera del Xúquer, Algemés, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Cotes, l'Ènova, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Masalavés, la Poble Llarga, Rafelguaraf, San Juan de Ènova, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, i Villanueva de Castellón. L'àmbit territorial del MI Col·legi d'Advocats d'Alzira ha de coincidir amb l'àmbit del partit judicial.

sones físiques i jurídiques, així com les herències i llegats de particulars.

b) Els béns que per qualsevol títol passen a formar part del patrimoni del Col·legi.

c) Les quantitats que per qualsevol concepte corresponga percebre al Col·legi quan administre, en compliment d'algun encàrrec temporal o perpetu, cultural o benèfic, determinats béns o rendes.

d) Qualsevol altre que legalment procedisca.

CAPÍTOL SEGON DE LA CUSTÒDIA, INVERSIÓ I ADMINISTRACIÓ

Article 113. Administració

1. El patrimoni del Col·legi serà administrat per la Junta de Govern.
2. Les orde de pagament seran expedides pel degà i executades pel tesorero.

Article 114. Regles Generals

1. El capital del Col·legi s'invertirà preferentment en valors de màxima garantia, llevat que la Junta de Govern acorde la seua inversió en immobles o en altres béns.

2. La Junta de Govern necessitarà acord de la Junta General per a aquelles inversions que superen el 15% de l'actiu del Col·legi, exclòs l'immobilitzat, i quan el percentatge d'aquest supere el 15% dels ingressos pressupostats de l'exercici.

3. Els valors es depositaran a l'entitat que la Junta de Govern acorde i els resguards del depòsit es custodiaran a la caixa del Col·legi, amb la personal i immediata responsabilitat del tesorero.

TÍTOL XII
DELS RECURSOS ECONÒMICS DEL COL•LEGI
CAPÍTOL PRIMER
DELS RECURSOS

Article 111. Recursos ordinaris

1. Constitueixen els recursos ordinaris del Col•legi d'Advocats:

a) Els rendiments de qualsevol naturalesa que produïsquen els béns o drets que integren el patrimoni del Col•legi.

b) Les quotes d'incorporació al Col•legi que lliurement determine la Junta de Govern.

c) Els drets pels informes, dictàmens o resolucions que evacue la Junta de Govern en les regulacions d'honoraris tant judicials com extrajudicials, en la quantia que establisca la Junta de Govern.

d) Els drets pels dictàmens, resolucions o arbitratges que se sotmeten a la Junta de Govern, els quals es fixaran discrecionalment d'acord amb les normes generals d'honoraris vigents en cada moment.

e) L'import de les quotes ordinàries o extraordinàries a abonar pels col•legiats, que seran fixats per la Junta de Govern.

f) Els drets per expedició de certificats, visats, registre, enviament o inscripció de document, així com la prestació de qualsevol altre servei o entrega de béns.

g) Les rendes procedents de la inversió dels romanents d'exercicis anteriors, si n'hi ha.

h) Els ingressos per la promoció entre els col•legiats de serveis i activitats exercides per tercers.

i) Els ingressos procedents de la prestació de serveis en la forma i quantia que la Junta de Govern establisca reglamentàriament.

j) Qualsevol altre ingrés per concepte que legalment procedisca.

2. Les rendes o ingressos que pel seu origen o procedencia hagen de ser assignades a fins específics, s'aplicaran al compliment d'aquests.

Article 112. Recursos extraordinaris

Constituiran els recursos extraordinaris del Col•legi d'Advocats:

a) Les subvencions d'administracions públiques, les donacions a altres per-

Col·legi o contrari a l'ordenament jurídic podrà, al temps de formular el recurs previst en l'apartat anterior, sol·licitar la suspensió i, immediatament, l'execució de l'acord impugnat.

Article 108. Llibres d'actes

Els acords adoptats en les sessions de la Junta General i de la Junta de Govern es transcriuran, separatament, en dos llibres que a aquest efecte i, amb caràcter obligatori, es portaran al Col·legi. Seran firmades pel degà i pel secretari o pels qui hagueren exercit les seues funcions en la Junta de què es tracte.

CAPÍTOL SEGON RECURSOS

Article 109. Contra acord de la Junta de Govern

1. Els acords emanats de la Junta de Govern que estiguen subjectes al dret administratiu, podran ser objecte de recurs davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, dins del termini d'un mes, comptat a partir del següent a aquell en què s'haguera adoptat o, si és el cas, notificat, als col·legiats o persones a què afecte.

2. El recurs podrà interposar-se davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats o davant de la Junta de Govern, que ho elevarà, amb els seus antecedents i informe que procedisca, al Consell Valencià, dins dels quinze dies següents a la data de presentació.

3 La interposició del recurs davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats no suspén l'executivitat dels acords, excepte en els casos següents:

a) Quan es recórrega una sanció disciplinària.

b) Quan, a instàncies de part, així ho acorde el Consell Valencià, per concórrer circumstàncies que puguen causar danys difícilment reparables o, desproporcionats, respecte a l'interés públic tutelat per l'acte. La interposició del recurs suspèndrà automàticament l'executivitat de l'acte. La suspensió s'alçarà una vegada es resolga el recurs.

Article 110. Contra acords de Junta General

1. Els acords de la Junta General seran recurribles per la Junta de Govern, o per qualsevol col·legiat a qui afecte personalment, davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats en el termini d'un mes des de la seua adopció.

2. Si la Junta de Govern, en impugnar un acord de la Junta General, entenguera que l'esmentat Acord és greument perjudicial per als interessos del

TÍTOL XI
DEL RÈGIM JURÍDIC DELS ACTES
I DE LA SEUA IMPUGNACIÓ
CAPÍTOL PRIMER
RÈGIM JURÍDIC I ESPECIALITATS
PROCEDIMENTALS

Article 105. Règim jurídic

El Col·legi d'Advocats d'Alzira, com a corporació de dret Públic, està subjecte al dret administratiu, en quant exercisca potestats públiques. La resta de la seua activitat és regida pel dret privat, sense perjudi de l'observança de les normes sobre la formació de la voluntat dels òrgans col·legials previstes en aquests Estatuts.

Article 106. Presumpció de validesa i executorietat dels actes subjectes a dret administratiu

Els actes dictats pels òrgans col·legials subjectes al dret administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten, llevat que en aquests es dispose una altra cosa. L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la seua notificació.

Article 107. Especialitats procedimentals

1. Representació: els col·legiats podran actuar per mitjà de representant, que haurà de ser un altre col·legiat, que acreditarà el seu mandat, mitjançant document públic o poder apud acta, i s'entendrà amb aquest les actuacions que practique el Col·legi, quan així ho sol·licite el mateix interessat.

2. Termini de resolució. El termini màxim de resolució i notificació dels procediment iniciats a instàncies d'interessat serà de quatre mesos. Per als procediments iniciats d'ofici, inclosos els disciplinaris, serà de sis mesos.

3. Recepció i registre de documents: al Col·legi es portarà un únic Registre en què es farà el corresponent assentament de tot recurs, escrit o comunicació que presenten els col·legiats.

TÍTOL X

CONSELL VALENCIÀ DE COL•LEGIS D'ADVOCATS

Article 104. Integració

L'Il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira està integrat en el Consell Valencià de Col•legis d'Advocats. Aquesta integració no afecta ni a personalitat pròpia i independent d'aquesta organització, ni a l'exercici de les competències del Col•legi.

TÍTOL IX

ESCOLA DE PRÀCTICA JURÍDICA

Article 103. Caràcter i finalitat

1. L'Escola de Pràctica Jurídica és un òrgan desconcentrat del Col·legi, que té per objectiu principal la formació deontològica i pràctica per a l'exercici professional, i facilita a l'advocat en els seus inicis professionals les eines i recursos pràctics necessaris per a capacitar-lo en habilitats destreses, actituds i coneixements imprescindibles per a iniciar-se en l'exercici professional amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a les normes deontològiques, així com per a capacitarlo específicament per a la seua immediata incorporació als serveis de torn d'ofici, d'assistència al detingut i d'orientació jurídica, una vegada complisca la resta dels requisits exigits reglamentàriament.

2. A través de l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d'Advocats d'Alzira desenrotllarà la funció de participació en els processos i proves que s'establisquen per a l'acreditació de l'aptitud professional, a través del qual es reconega la capacitat necessària per a l'exercici professional.

3. L'organització i funcionament de l'Escola de Pràctica Jurídica serà regulada per la Junta de Govern.

2. En les propostes s'expressaran els assumptes concrets que hagen de tractar-se en la sessió.

3. La sessió es convocarà dins dels trenta dies següents a la presentació de la proposta al Registre d'Entrada del Col·legi o de l'adopció de l'acord per la Junta de Govern.

adoptar acords per aclamació.

4. Per a l'adopció d'acords en les sessions extraordinàries caldrà que hi haja més vots a favor que en contra de la proposta d'acord, excepte en els casos següents:

- a) Moció de censura a la Junta de Govern o a algun dels seus membres, per a l'aprovació de la qual caldrà el vot favorable de dos terços dels assistents.
- b) En els de segregació o, si és el cas, fusió o absorció, que caldrà el vot favorable de la meitat més un dels assistents.
- c) Dissolució, que caldrà el vot favorable de la meitat més un dels assistents.

Article 101. Sessions ordinàries

1. La Junta General es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any, i no s'hi podrà tractar cap assumpte que requerisca una majoria especial per a la seua constitució.

2. La primera de les sessions de caràcter ordinari se celebrarà durant el primer trimestre de l'any natural, en què es tractaran, almenys, els assumptes següents:

- a) Informe pel degà de la seua gestió i de la Junta de Govern, amb ressenya dels esdeveniments més importants que durant l'any hagen tingut lloc, en relació amb el Col·legi.
- b) Lectura, discussió i votació del compte general de despeses i ingressos de l'any anterior.
- c) Presa de possessió, si és el cas, dels seus càrrecs respectius pels membres de la Junta de Govern elegits, i cessaran aquells a què correspon cessar.
- d) Precs i preguntes.

3. La segona Junta General Ordinària se celebrarà en l'últim trimestre de l'any, que necessàriament almenys haurà de tractar del següent orde del dia:

- a) Lectura i aprovació del pressupost format per la Junta de Govern per a l'exercici següent.
- b) Precs i preguntes.

Article 102. Sessions extraordinàries

1. La Junta General es reunirà amb caràcter extraordinari, quan així ho acorde el degà, per iniciativa pròpia, a proposta de Junta de Govern o del deu per cent dels col·legiats, i sempre que siga preceptiva una majoria especial per a la seua constitució i per a l'adopció d'acords.

no inferior al quinze per cent dels col·legiats, tant en la primera, com en la segona convocatòria, així com la seua presència durant la votació de l'assumpte. La segona convocatòria se celebrarà vint-i-quatre hores després. En cas de dissolució, haurà de concórrer un nombre de col·legiats no inferior al vuitanta per cent, tant en la primera, com en la segona convocatòria, així com la seua presència durant la votació de l'assumpte. La segona convocatòria se celebrarà vint-i-quatre hores després.

4. Les sessions seran presidides pel degà, o per qui legalment el substituïska, i serà preceptiva la presència d'aquest i la del secretari o de qui legalment el substituïska per a la validesa de la sessió siga ordinària o extraordinària.

Article 99. Deliberació

1. El secretari, d'orde del degà, llegirà l'enunciat de cada assumpte a tractar segons conste en l'orde del dia, a continuació, el membre de la Junta de Govern que haja sigut designat ponent de l'assumpte, exposarà la motivació i la proposta d'acord a adoptar. Si l'assumpte haguera sigut proposat per un col·legiat i no s'haguera designat ponent, serà a aquest a qui corresponga l'exposició i proposta.

2. El degà obrirà el debat i atorgarà la paraula, per una vegada, als que li la sol·liciten, i es podran establir les limitacions temporals que considere oportunes. Així mateix, podrà concedir un segon torn d'intervenció als col·legiats per a rectificar la seua posició inicial, i les intervencions que considere convenients per al·lusions.

3. Finalitzades les intervencions, el degà sotmetrà l'assumpte a votació, en els termes de la proposta d'acord, o de les alternatives que s'hi plantegen.

Article 100. Votació

1. Les votacions seran ordinàries a mà alçada, o nominals. Només seran nominals quan ho determine el degà o quan ho sol·liciten almenys el deu per cent dels assistents. També podran adoptar-se els acords per votació secreta, mitjançant paperetes en sobres, que així ho asseguren, quan ho sol·licite un 10 per cent dels assistents.

2. En cap cas no serà delegable el vot.

3. Per a l'adopció d'acords en les sessions ordinàries caldrà que hi haja més vots a favor que en contra de la proposta d'acord, i es podran, també,

2. El secretari, amb una antelació mínima de quinze dies a la celebració de la sessió de la Junta General, inserirà anunci de la convocatòria en el tauler del col·legi i expedirà les citacions. Les citacions es comunicaran per via telemàtica o mitjançant depòsit en l'apartat que cada col·legiat té obert a les dependències col·legials.

3. Des de la data d'inserció de l'anunci en el tauler col·legial, estaran a disposició dels col·legiats i advocats inscrits els expedients en què s'inclouen els antecedents necessaris perquè puguin formar-se opinió sobre els assumptes a tractar en la sessió.

4. El degà, amb l'acord previ favorable de la Junta de Govern, pot convocar sessió urgent de la Junta General. En aquest cas, l'antelació, amb què ha d'inserir-se l'anunci i expedir-se les citacions, pot reduir-se fins a quaranta-vuit hores.

Article 98. Constitució

1. Les sessions de la Junta General poden ser ordinàries o extraordinàries.

2. Per a la constitució de la Junta General, en sessió ordinària, caldrà l'assistència de la meitat més un dels col·legiats, en primera convocatòria, i siga quin siga el nombre d'assistents, en segona convocatòria. La segona convocatòria serà sempre mitja hora després de la primera, i haurà d'expressar-se aquesta regla en els anuncis i citacions que expedisca el secretari.

3. Per a la constitució de la Junta General amb caràcter extraordinari, la constitució i règim de primera i segona convocatòria serà el mateix, llevat que es tracten els assumptes següents:

- a) Modificació dels estatuts.
- b) Moció de censura a la Junta de Govern o a algun dels seus membres.
- c) Segregació o, si és el cas, fusió o absorció.
- d) Dissolució.

En els dos primers casos, caldrà l'assistència, en primera convocatòria, de la meitat més un dels col·legiats i la presència del vint-i-cinc per cent dels col·legiats i advocats inscrits, durant la deliberació i votació de l'assumpte. La segona convocatòria se celebrarà vint-i-quatre hores després, i quedarà constituïda la Junta siga quin siga el nombre de col·legiats que assistisca, i s'haurà d'expressar aquesta regla en els anuncis i citacions que expedisca el secretari. En el tercer cas, haurà de concórrer un nombre de col·legiats

CAPÍTOL SEGON DE LA JUNTA GENERAL

Secció Primera. Composició i funcions

Article 95. La Junta General

1. La Junta General és l'òrgan suprem de la voluntat, d'acord amb les disposicions d'aquest Estatut i sense més limitacions que les legalment establides.

2. La Junta General està formada pels col·legiats i els advocats inscrits.

Article 96. Atribucions de la Junta General

Les atribucions de la Junta General són:

a) L'aprovació i modificació dels Estatuts d'aquest Col·legi i dels reglaments de règim interior per al desenvolupament d'aquests.

b) L'aprovació del balanç, compte de resultats i de la liquidació pressupostària de cada exercici, així com dels pressupostos anuals d'ingressos i despeses.

c) L'aprovació o censura de la gestió de la Junta de Govern o de qualsevol dels seus membres.

d) La fusió, segregació i dissolució del Col·legi, excepte en aquells supòsits en què ho impose directament la Llei.

e) L'adquisició, alienació, gravamen i la resta d'actes jurídics de disposició sobre béns immobles de la corporació, sense perjudici del que disposa l'article 114.

1) Aquells assumptes que el sotmeti la Junta de Govern Secció Segona. Funcionament.

Article 97. Convocatòria

1. La convocatòria la formularà el degà, i establirà l'orde del dia, el dia, l'hora i el lloc. S'inclouran en la convocatòria tots els assumptes que el degà considere oportú, així com totes les proposicions de col·legiats i advocats inscrits que s'hagen presentat a la Secretaria fins al dia de la convocatòria, i siguen competència de la Junta General. Si a juí del degà no fossen competència d'aquest òrgan els sotmetrà a consideració de la següent sessió de la Junta de Govern.

recs i persones correctament expressats.

3. Finalitzat l'escrutini, el president anunciarà el seu resultat, i es proclamaran a continuació electes els candidats que hagueren obtingut per a cada càrrec el nombre més gran de vots. En cas d'empat, s'entendrà elegit el de major temps d'exercici en el mateix Col·legi.

4. En el termini de cinc dies des de la constitució dels òrgans de govern, haurà de comunicar-se aquesta al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, a l'administració Pública de la Generalitat, i inscriure's al Registre de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Article 93. Procediment electoral: Efectes suspensius dels recursos

Els recursos que s'interposen en el procés electoral o contra el seu resultat, davant de la Junta de Govern del Col·legi o davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, no suspendran la votació, proclamació i possessió dels elegits, excepte quan així s'acorde per causes excepcionals mitjançant una resolució expressa motivada.

Secció Quarta. Cessaments

Article 94. Cessament

Els membres de la Junta de Govern cessaran per les causes següents:

- a) Incompliment sobrevingut dels requisits estatutaris per a exercir el càrrec.
- b) Per expiració del terme o termini per al qual van ser elegits o designats, cessament que no serà efectiu fins que prenga possessió de l'esmentat càrrec qui el substituïska.
- c) Renúncia de l'interessat.
- d) Falta d'assistència injustificada a tres sessions consecutives o cinc alternes en el termini d'un any, amb l'acord previ de la mateixa Junta, o a alguna de les previstes en el paràgraf tercer, de l'apartat 6 de l'article 75 dels presents Estatuts.
- e) Aprovació de moció de censura, segons allò que s'ha regulat en el següent capítol.
- f) Defunció.

vern de suficient nombre de paperetes amb els noms dels candidats en blanc i paperetes en blanc.

5. Acte de votació personal. Els votants hauran d'acreditar a la mesa electoral la seua personalitat. El president de la mesa comprovarà la seua inclusió en el cens elaborat per a les eleccions, pronunciarà en alta veu el nom i cognoms del votant, i indicarà que vota, després de la qual cosa el mateix president introduirà en l'urna la papereta doblegada.

6. Vot per correu. La papereta de votació haurà d'introduir-se doblegada en el sobre blanc que es tancarà i s'introduirà al seu torn junt amb la fotocòpia del document nacional d'identitat en el sobre exterior, que es remetrà per correu certificat a la seu del Col·legi. Els vots per correu hauran de dirigir-se al secretari de la Junta de Govern que es farà càrrec de la seua custòdia fins al moment de l'inici de les eleccions, que farà entrega d'aquests a la mesa electoral, que els introduirà en l'urna designada a aquest efecte. S'admetran els vots per correu que es reben en la seu electoral fins al moment del tancament de la votació. Una vegada finalitzades les eleccions, es procedirà en primer lloc a l'obertura de l'urna amb els vots per correspondència, i es procedirà a comprovar que les dades i firma de l'elector que consten en el sobre exterior coincideixen amb la firma del Document Nacional d'Identitat que, preceptivament, aura adjuntat, i en aquest cas s'introduirà la papereta de nou en l'urna, amb el seu sobre. Serà declarat nul tot vot per Correu que no complisca estrictament la normativa prevista en aquests Estatuts col·legials. Els col·legiats que sol·liciten votar per correu no podran votar personalment. S'estendrà acta i llista dels sobres rebuts i els seus votants.

Article 92. Procediment electoral: Fase d'escrutini i proclamació

1. Finalitzada la votació es procedirà a l'escrutini, i es llegirà en veu alta totes les paperetes.

2. Hauran de ser declarats nuls totalment aquells vots que continúen expressions alienes a l'estricta contingut de la votació o que continguen ratllades o raspadures, i nuls parcialment quant al càrrec a què afecte, les que indiquen més d'un candidat per a un mateix càrrec, o nom de persones que no concórreguen a l'elecció. Podrà no obstant ratllar-se el nom d'un candidat i indicar de forma manuscrita el d'un altre que opte al mateix càrrec. Aquelles paperetes que es troben només parcialment omplides quant al nombre de candidats, però que reunisquen els requisits exigits per a la seua validesa, ho seran per als càr-

5. **Vot per correu.** Els col·legiats que vullguen exercir el vot per correu hauran de sol·licitar-lo individualment en compareixença personal a les oficines de la seu col·legial fins al quinzé dia anterior a la data de la votació. El col·legiat haurà d'acreditar la seua identitat mitjançant exhibició del DNI o del carnet col·legial. El Col·legi registrarà la petició de vot i prendrà nota en el cens perquè el dia de les eleccions no s'exercisca el dret de vot personalment. També, els col·legiats que per una impossibilitat física degudament acreditada no puguen comparéixer personalment podran atorgar poders a un altre col·legiat per a aquest tràmit. En tot cas, la firma del Col·legiat en el sobre exterior prevista en l'apartat següent serà insubstituïble. Al Col·legi s'entregarà al sol·licitant del vot per correu un sobre blanc i un sobre exterior, en què es farà constar en l'anvers la paraula ELECCIONS i, al revers, el seu nom i cognoms, adreça, número de col·legiat i la seua firma, i la inscripció següent: «Conté paperetes per a l'elecció de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats d'Alzira»

Article 91. Procediment electoral: Fase d'elecció

1. **Constitució de la Mesa.** Per a la celebració de l'elecció, es constituirà la mesa electoral que quedarà integrada pel degà com a president, o per un membre de la Junta que el substituïska en l'esmentat acte auxiliat, com a mínim, per dos membres més de la mateixa Junta com a vocals, i actuarà el més modern d'aquests com a secretari, llevat que forme part de la mesa electoral el secretari de la Junta de Govern, i en aquest cas exercira aquesta funció. Cada candidat no podrà, per la seua banda, designar entre els col·legiats un o més interventors que el representen en les operacions de l'elecció.

2. **Nombre d'urnes.** La mesa electoral establirà urnes separades per al dipòsit dels vots dels col·legiats exercents i no exercents, sense perjuí de l'urna per a vot per correu.

3. **Duració.** L'elecció tindrà per al seu desenrotllament un temps mínim de quatre hores.

4. **Paperetes.** Les paperetes de vot, que seran editades pel Col·legi, hauran de ser blanques i de la mateixa grandària, i hauran de portar impresos, per una sola cara i correlativament, els càrrecs a l'elecció dels quals es procedix. Els candidats podran, per la seua banda, confeccionar paperetes, les quals hauran de ser del mateix format, color i grandària a les editades per la Junta. A la seu en què se celebre l'elecció haurà de disposar la Junta de Go-

dels elegits, que es concretaran per sorteig, ostentaran el mandat per un període de dos anys, i s'efectuarà la renovació de l'altra meitat i les successives del mode que preveu amb caràcter general aquesta secció.

Article 90. Procediment electoral: fase prèvia a l'elecció

1. Publicació de les eleccions. Adoptat l'acord de convocatòria electoral, s'insserirà anunci d'aquesta en el tauler d'anuncis de la seu col·legial, amb quaranta-cinc dies d'antelació a la data de celebració de l'elecció. En l'anunci haurà de constar:

a) Càrrecs que han de ser objecte d'elecció i requisits tant d'antiguitat com de situació col·legial, exigits per a poder aspirar a cada un d'aquests.

b) Dia i hora de celebració de la Junta i hora en què es tancaran les urnes per a començament de l'escrutini, segons allò que s'ha disposat sobre el particular en el present Estatut.

c) Instruccions per a l'exercici del dret de vot per correu. Així mateix, s'exposarà en els dits taulers d'anuncis les llistes separades de col·legiats exercents i no exercents amb dret de vot, cens que quedarà tancat en data als tres mesos anteriors a la de la celebració de les eleccions.

2. Presentació de candidatures. Les candidatures hauran de presentar-se a la Secretaria del Col·legi amb, almenys, trenta dies d'antelació a la data assenyalada per a l'acte electoral. Les candidatures podran ser conjuntes per a diversos càrrecs o individuals per a càrrecs determinats, i hauran de ser subscrietes exclusivament pels mateixos candidats. Cap col·legiat no podrà ser candidat a més d'un càrrec.

3. Reclamacions al contingut de les llistes electorals. Els col·legiats que volgueren formular reclamació contra les llistes electorals hauran de verificar-la dins del termini dels cinc dies següents a l'exposició d'aquestes. La Junta de Govern, cas d'haver-hi reclamacions contra les llistes, resoldrà sobre aquestes, dins dels tres dies següents a l'expiració del termini per a formular-les, i es notificarà la seua resolució a cada reclamant, dins dels dos dies següents.

4. Proclamació de candidats. La Junta de Govern, l'endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, proclamarà candidats als que reunisquen els requisits legals i estatutaris exigibles, i es consideraran electes els qui no tinguen oponents. Aquest acord es publicarà en el tauler d'anuncis del Col·legi.

2. Els càrrecs duraran cinc anys.
3. La renovació dels càrrecs de la Junta de Govern es verificarà per meitat, cada dos anys i mig, amb subjecció al següent torn de rotació:
 - a) degà, tresorer, diputat 1r, diputat 2, i si és el cas, 3r.
 - b) Bibliotecari comptador, secretari, diputat 2n i, si és el cas, 4t.
4. Si es produeix alguna vacant en la Junta de Govern, es proveirà també per elecció, en la Junta General de més pròxima celebració i l'elegit exercirà el seu càrrec pel temps que hi haja fins a l'època de la seua renovació, segons el torn establert anteriorment. Els qui foren designats en aquesta elecció per a substituir aquells que no agüeren esgotat l'acabament del seu mandat, ocuparan els càrrecs durant el temps legal que faltara als substituïts, però podran ser reelegits en la renovació ordinària de càrrecs, i prendran possessió immediatament.

Article 88. Requisits per a presentar candidatura

1. El degà i els altres membres de la Junta de Govern, seran col·legiats exercents, que tinguen la condició d'elector i residents en la demarcació del Col·legi, i en què no concórrega cap de les causes d'incapacitat ni en les prohibicions establides en aquests Estatuts.
2. No es podrà pertànyer a la Junta de Govern en càrrecs distints.
3. Per a concórrer a les eleccions com a candidat a degà, caldrà haver desenrotllat durant un any l'exercici professional, per als altres càrrecs tres anys.

Article 89. Convocatòria

1. La Junta de Govern convocarà eleccions, tres mesos abans a la finalització del mandat ordinari o quan es produïra alguna vacant en aquesta.
2. Quan per qualsevol causa la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern queden vacants, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats designarà una Junta Provisional d'entre els col·legiats exercents amb mes de 25 anys d'exercici, que convocarà en el termini de trenta dies eleccions per a la provisió dels càrrecs vacants. Aquestes eleccions hauran de celebrar-se dins dels quaranta-cinc dies següents, comptats a partir de la convocatòria.
3. Si queden vacants la meitat o més dels càrrecs de la Junta de Govern, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats les completarà en forma també provisional, i s'actuarà per a la seua provisió definitiva en la forma abans consignada. En el cas previst en el paràgraf primer d'aquest article, la meitat

2. La convocatòria per a les reunions serà feta pel secretari amb, almenys, tres dies d'antelació. Es formularà per escrit i anirà acompanyada de l'orde del dia corresponent, que establirà el degà. Forra d'aquest no podran tractar-se altres assumptes, excepte els que el degà considere d'urgència.

3. La Junta de Govern quedarà favoritament constituïda quan concórrega la majoria dels seus membres. No obstant això, la Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda, encara sense convocatòria prèvia, quan es troben reunits tots els seus membres, i així siga acordat per unanimitat.

4. Els acords seran adoptats per majoria de vots favorables dels assistents, i el degà tindrà vot de qualitat, excepte quan es requerisca un quòrum especial

Secció tercera. Nomenament i substitució dels membres de la Junta de Govern.

Article 86. Capacitat per a formar part de la Junta

1. No podran formar part de les juntes de Govern:

a) Els col•legiats que hagen sigut condemnats per sentència ferma, que comporte la inhabilitació o suspensió per a càrrecs públics, en tant aquestes subsistisquen.

b) Els col•legiats als que s'haja imposat sanció disciplinària per falta greu en qualsevol col•legi d'advocats, mentre no haja sigut rehabilitat.

c) Els col•legiats que siguin membres d'òrgans rectors d'un altre col•legi professional.

d) En el cas de sancions disciplinàries imposades per Tribunal, jutjats o òrgans que no siguin col•legis d'advocats les sancions dels quals consten en el seu expedient personal, la Junta de Govern, mitjançant una decisió motivada, decidirà si constitueixen o no impediment per a l'accés als càrrecs directius.

2. Els qui es trobaren en alguna de les situacions a què es refereixen els apartats anteriors no podran ser objecte de sufragi passiu en les eleccions, i si són membres de la Junta cessaran immediatament.

Article 87. Forma de proveir-se

1. Els càrrecs de la Junta de Govern seran proveïts per elecció mitjançant votació directa i secreta de tots els col•legiats, exercents i no exercents, i es computarà el valor dels vots d'aquells com a doble del d'aquests últims.

justícia o la llibertat i independència de l'exercici professional.

4. En relació amb els recursos econòmics del Col·legi:

a) Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi, tant generals com atribuïts o procedents de les diverses seccions incardinades en aquest.

b) Redactar els pressupostos i rendir els comptes anuals. Per a la seua redacció i distribució de les partides que l'integren, es tindrà en compte la procedència dels ingressos, en quant pel seu origen, hagen de ser aplicats a fins específics especialment de tipus assistencial.

c) Acordar la inversió en immobles, amb els límits que assenyala l'art. 114 dels presents Estatuts.

d) Proposar a la Junta General, la inversió o disposició del patrimoni col·legial, qualssevol que siga l'origen d'aquests.

Article 84. Facultats especials

1. La Junta de Govern podrà emetre les consultes i dictàmens, així com arbitratges i laudes corporatius, dins dels termes autoritzats pels apartats l), m), n) i o) de l'article 4) de l'Estatut General de l'Advocacia.

2. Els arbitratges, en matèria de dret privat, s'ajustaran a la llei vigent aplicable, previ el seu sotmetiment a aquest per les parts.

3. Els laudes corporatius es tramitaran d'acord amb les normes que en cada cas assenyalen la Junta de Govern, qui podrà designar un o més ponents que tramiten aquests, i es resoldrà, en tot cas, després d'oïr prèviament per escrit les parts i a la vista dels antecedents que aquestes li subministren. Caldrà el sotmetiment exprés de les parts al laude corporatiu.

4. La Junta de Govern determinarà a qui correspon abonar els honoraris que es meriten per l'emissió dels arbitratges i laudes corporatius, i estaran obligades les parts a satisfer-los, d'acord amb l'esmentada decisió, i s'hauran d'ingressar aquests o els que s'ingressen d'anàloga significació, en els fons col·legials.

Secció Segona. Funcionament

Article 85. Reunions de Junta

1. La Junta de Govern es reunirà ordinàriament una vegada al mes prèvia convocatòria del degà, qui haurà de convocar-la quan ho sol·licite, almenys, una quarta part dels seus integrants.

ll) Convocar juntes ordinàries i extraordinàries, i assenyalar l'orde del dia per a cada una.

m) Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats.

n) Proposar els reglaments d'orde interior que jutge convenients, que necessitaren l'aprovació de la Junta General per a la seua vigència.

o) Nomenar les comissions, agrupacions i seccions de col·legiats que calgueren per a l'estudi i desenrotllament de les matèries que puguen interessar als fins de la corporació i a la defensa i promoció de l'advocacia.

p) Crear, suprimir i regular les seccions del Col·legi i l'Escola de Pràctica Jurídica.

t). Vetlar perquè en l'exercici professional s'observen les condicions de dignitat i prestigi que corresponen a l'advocat, així com propiciar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats, i impedir la competència deslleial, d'acord amb la legislació vigent.

u) Informar els col·legiats amb promptitud de totes les qüestions que puguen afectar-los, ja siguen d'índole corporativa, col·legial, professional o cultural, de què la Junta de Govern tinga notícies en l'exercici de la seua funció o en el d'algun dels seus membres o representants d'ells.

v) Regular, en els termes legalment establits, el funcionament i la designació per a prestar els serveis d'assistència jurídica gratuïta.

x) Proposar a la Junta General normes de desplegament o per a l'aplicació i compliment dels presents Estatuts

i) Totes les altres que no estiguen expressament atribuïdes a la Junta General.

2. En relació amb els tribunals de Justícia

a) Fomentar i estretir les relacions de respectuosa cordialitat entre el Col·legi i els seus col·legiats i la Magistratura.

b) Atorgar l'empara col·legial davant dels jutjats i tribunals

3. En relació amb els òrgans constitucionals, de la Generalitat, així com de la seua administració pública, i d'altres administracions públiques

a) Defensar, quan ho estime procedent i just, els col·legiats en l'exercici de les funcions de la professió o en ocasió d'aquestes.

b) Promoure prop del govern i de les autoritats quant es considere beneficis per a l'interés comú i per a la recta i ràpida administració de justícia.

c) Exercitar els drets i accions que corresponguen al Col·legi i, en particular, contra els que entorpisquen el bon funcionament de l'administració de

compliment dels fins i funcions del Col·legi, excepte les reservades a la competència exclusiva de la Junta General, i especialment:

1. En relació amb l'exercici professional i als col·legiats:

a) Sotmetre a referèndum, per sufragi secret, assumptes concrets d'interès col·legial.

b) Resoldre sobre l'admissió de llicenciats o doctors en Dret que sol·liciten incorporar-se al Col·legi, així com resoldre les sol·licituds d'inscripció i incorporació dels Advocats pertanyents a la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu, i es podrà delegar per a aquesta facultat el degà, per a casos d'urgència, que seran sotmesos a la ratificació d'aquella.

c) Vetlar per que els col·legiats observen bona conducta en relació amb els tribunals, els seus companys, els seus clients, i que en l'exercici de la seua funció despleguen la necessària diligència i competència professional.

d) Impedir l'exercici de la professió als que, sent col·legiats o no, l'exerciren en forma i amb condicions contràries a l'orde legal establert.

e) Perseguir els infractors d'allò que s'ha regulat en el número anterior, així com les persones, naturals o jurídiques, que faciliten l'esmentat irregular exercici professional, i exercitar davant d'aquestes totes les accions jurisdiccionals que calgueren o foren convenients.

f) Exercitar les accions i actuacions oportunes per a impedir i perseguir l'intrusisme, així com l'exercici de la professió als que, col·legiats o no, l'exerciren en forma i amb condicions contràries a les legalment establides, sense excloure les persones, naturals o jurídiques, que faciliten l'exercici professional irregular.

h) Establir les quotes d'incorporació i les ordinàries que hagen de satisfer els col·legiats exercents, i les dels no-exercents, per a sosteniment de les càrregues i serveis col·legials.

i) Proposar a la Junta General, si ho estima necessari, la imposició de quotes extraordinàries als seus col·legiats.

j) Recaptar l'import de les quotes i dels altres recursos establits per al sosteniment de les càrregues del Col·legi, del Consell Valencià de col·legis d'Advocats i del Consell General de l'Advocacia.

k) Regular els honoraris dels advocats, que tindran caràcter merament orientatiu, i informar quan els tribunals demanen el seu dictamen amb subjecció al que disposen les lleis o quan ho sol·liciten els col·legiats minutants.

l) Convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta de Govern.

tatuts i les lleis els encomanen. Els seus càrrecs estaran numerats per tal de substituir per orde numèric creixent el degà, en cas de malaltia, absència o vacant, i en orde numèric decreixent el secretari, tresorer i bibliotecari comptador. Els diputats duran a terme els serveis que el degà o la Junta de Govern els encomane, i les substitucions que els competisquen. Els diputats exerciran, a títol merament enunciatiu, les següents funcions, que per acord de la Junta de Govern s'assignara als que en cada cas s'estime més convenient per al seu millor desenrotllament i eficàcia:

a) Exercir la inspecció de quant afecte l'intrusisme, en totes les seues formes, i investigarà, si exerceix indegudament la professió, aquell en qui no concórreguen els requisits legals.

b) Atendre les relacions amb els tribunals, en totes les incidències que es deriven de l'exercici de la professió pels col·legiats, i vigilar, especialment, que es respecten tots els drets que els corresponguen i complisquen els deures que la defensa i els estatuts els imposen, sobretot als encarregats dels torns d'ofici i d'assistència a detinguts.

c) Cuidar de les relacions del Col·legi i dels seus col·legiats, amb la Mutualitat General de Previsió de l'Advocacia, i de les funcions pròpies de la labor assistencial que desenrotlle el Col·legi.

d) Organitzar, vigilar i controlar el torn d'ofici i d'assistència a detinguts.

Article 82. Tractament i insígnies

1. El degà tindrà el tractament d'excel·lentíssim, i altres que legalment li corresponguen. La resta de membres de la Junta de Govern tindran tractament d'illustríssims.

2. El degà i els membres de la Junta de Govern, usaran en els actes oficials, com a distintiu de la seua personalitat, les medalles amb cordó, penjades al coll, que tradicionalment ja s'utilitzen, així com togues amb l'escut del Col·legi, i punyetes en la bocamànega, i podran igualment utilitzar una medalla de solapa.

3. Les medalles amb cordó, s'utilitzaran únicament mentre es pertanga a la Junta de Govern, i es podran usar les de solapa, en tot moment, fins i tot després de cessar en el càrrec.

Article 83. Atribucions de la Junta de Govern

Són atribucions de la Junta de Govern totes aquelles necessàries per al

d'haver obligatòriament aquell en què s'anoten les correccions que s'imposen als col•legiats, així com el Llibre Registre de títols.

d) Rebre i donar compte al degà de totes les sol•licituds i comunicacions que es remeten al Col•legi.

e) Expedir amb el vistiplau del degà els certificats que sol•liciten els interessats.

f) Organitzar i dirigir les oficines i ostentar la direcció de personal, i proposar la contractació i cessament dels empleats del Col•legi.

g) Portar un registre en què, per orde alfabètic dels cognoms dels col•legiats, es consigne l'històric d'aquests dins del Col•legi.

h) Revisar cada any les llistes dels advocats del Col•legi, i expressar-ne l'antiguitat i domicili.

i) Tindre a càrrec seu l'arxiu i segell del Col•legi.

3. Tresorer: correspondrà al Tresorer:

a) Materialitzar la recaptació i custodiar els fons del Col•legi.

b) Realitzar els cobraments i pagaments derivats del pressupost d'ingressos i despeses anual i quants, en general, acorde la Junta de Govern o procedisquen d'acords fermes adoptats per la Junta General.

c) Informar periòdicament la Junta de Govern del compte d'ingressos i despeses i marxa del pressupost, i formalitzar anualment els comptes de l'exercici econòmic vençut.

d) Redactar i proposar el pressupost d'ingressos i despeses anuals que la Junta de Govern haja de presentar a l'aprovació de la Junta General.

e) Ingressar i retirar fons dels comptes bancaris amb la seua sola firma o amb les altres que acorde la Junta de Govern.

f) Portar inventari minucios dels béns del Col•legi, de què serà administrador.

g) Controlar la comptabilitat i verificar la caixa.

h) Cobrar els interessos i rendes del capital del Col•legi.

4. Bibliotecari comptador: tindrà les obligacions següents:

a) Cuidar de la biblioteca

b) Formar i portar catàlegs d'obres.

c) Proposar l'adquisició del que considere procedents als fins corporatius.

d) Intervindre els pagaments que realitze el tresorer per orde del degà.

5. Diputats. Els diputats actuaran com a vocals de la Junta, i exerciran les funcions d'aquesta que la mateixa Junta acorde i les que els presents Es-

TÍTOL VIII
DELS ÒRGANS DE GOVERN
CAPÍTOL PRIMER
LA JUNTA DE GOVERN

Secció Primera. Composició i funcions

Article 80. Composició de la Junta de Govern

El Col·legi d'Advocats d'Alzira estarà regit per una Junta de Govern que estarà constituïda pel degà, un tresorer, un bibliotecaricomptador, un secretari i tres diputats.

Article 81. Funcions dels membres de la Junta de Govern

1. Degà. Correspon al degà:

a) La representació institucional i oficial del Col·legi en totes les relacions d'aquest amb els òrgans constitucionals, els de l'administració de justícia, de les administracions públiques, i qualsevol altra persona física o jurídica;

b) L'exercici les funcions de vigilància i correcció que els Estatuts reserven a la seua autoritat;

c) La presidència, les juntes de Govern i les juntes generals, així com de totes les comissions, seccions i comités especials a què assistisca, i dirigirà les discussions amb vot de qualitat, en cas d'empat.

d) La proposta dels advocats que hagen de formar part dels tribunals d'oposició, entre els que reunisquen les circumstàncies necessàries a aquest efecte.

e) A més d'aquestes funcions, s'esforçarà principalment a mantindre amb els tots els companys una relació assídua de protecció i consell, i fomentarà la cooperació i la competència lleial entre companys i la tutela del dret de defensa davant de qualsevol ingerència, limitació o restricció il·legítima.

2. Secretari: corresponen al secretari les funcions següents:

a) Redactar i dirigir els oficis de citació per a tots els actes del Col·legi, segons les instruccions que reba el degà i amb l'anticipació deguda.

b) Redactar les actes de les juntes generals i les que celebre la Junta de Govern.

c) Portar els llibres necessaris per al millor i més ordenat servei, i haurà

contra un altre sobre responsabilitats relacionades amb l'exercici professional, haurà d'informar el degà del Col·legi perquè realitzi una labor de mediació, si la considera oportuna.

No obstant les mesures provisionals, si és el cas aprovades, podran ser executades des de la seua adopció.

2. Les sancions podran ser fetes públiques quan guanyen fermesa.

3. Totes les sancions tindran efectes en l'àmbit de tots els col·legis d'Advocats d'Espanya, i amb aquesta finalitat el Col·legi ho comunicarà al Consell General de l'Advocacia perquè procedisca a comunicar-ho a tots els col·legis.

Article 77. Caducitat del procediment sancionador

1. Si no haguera recaigut una resolució, transcorreguts sis mesos en el supòsit de les faltes greus, molt greus i faltes lleus des de la iniciació de l'expedient disciplinari, tenint en compte les possibles interrupcions del seu còmput per causes imputables a l'interessat, es produirà la caducitat a què es referix l'article 44.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La declaració de caducitat d'ofici o a instància del mateix interessat no impedirà la incoació d'un nou expedient disciplinari en el cas que la infracció comesa no haguera prescrit.

CAPÍTOL SEGON RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL DELS ADVOCATS

Article 78. Àmbit

1. Els advocats estan subjectes a responsabilitat penal pels delictes i faltes que cometen en l'exercici de la seua professió.

2. Els advocats, en el seu exercici professional, estan subjectes a responsabilitat civil quan per dol o negligència danyen els interessos la defensa dels quals els haguera sigut confiada, responsabilitat que serà exigible d'acord amb la legislació ordinària davant dels tribunals de Justícia, i es podrà establir legalment el seu assegurament obligatori.

Article 79. Actuació professional davant d'un advocat

L'advocat que reba l'encàrrec de promoure actuacions de qualsevol classe

diferents dels que van servir de base al plec de càrrecs i a la proposta de resolució, sense perjudici de la seua distinta valoració jurídica. Els acords de suspensió per més de sis mesos o expulsió hauran de ser presos per la Junta de Govern, mitjançant votació secreta i amb la conformitat de les dues terceres parts dels seus components. A aquesta sessió estaran obligats a assistir tots els components de la Junta, de manera que el que sense causa justificada no concórrega cessarà com a membre de la Junta de Govern i no podrà presentar-se com a candidat en l'elecció mitjançant la que es cobrisca el seu vacant.

7. Règim d'impugnació. Seran impugnables davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats:

a) Els acords de la Junta de Govern en la virtut dels quals, s'adopten mesures provisionals, s'arxivien les actuacions o s'imposen sancions disciplinàries.

b) Qualsevol altra decisió dins del procediment que, encara que tinga el caràcter d'acte de tràmit, determine la impossibilitat de continuar-ho o produïska indefensió. El recurs podrà interposar-se en el termini improrrogable d'un mes des de la seua notificació, per mitjà d'un escrit a presentar davant de la Junta de Govern del Col·legi, i, si és el cas, la Junta de Govern aura de remetre'l en el termini de deu dies al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, junt amb el seu informe i amb una còpia completa i ordenada de l'expedient.

8. Execució i suspensió de l'execució de les resolucions administratives sancionadores. Les resolucions de la Junta de Govern dictades, en exercici de la potestat disciplinària pròpia, no podran executar-se fins que hagen sigut confirmades pel Consell Valencià de Col·legis d'Advocats en resoldre el recurs, o bé fins que haja transcorregut el termini establert per a la seua interposició sense efectuar-la. No obstant les mesures provisionals, si és el cas, aprovades podran ser executades des de la seua adopció. Correspon la seua execució a la Junta de Govern, la qual podrà suspendre aquesta, de conformitat i en els termes que preveu la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, si es coneguera la interposició de recurs de l'esmentada naturalesa.

Article 76. Efectes, notificacions i recursos contra les sancions

1. Les sancions disciplinàries s'executaran una vegada que siguen fermes.

atenent els antecedents que es troben en poder de l'expedient, la gravetat dels fets imputats, i els precedents de l'advocat afectat. La suspensió provisional en els serveis de torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta podrà prolongar-se fins que recaiga en el procediment resolució que haja posat fi a la via administrativa i siga executiva.

4. Notificacions. Les notificacions s'ajustaran al que estableixen els presents Estatut i, si no n'hi ha, a allò que s'ha previst en l'article 94.2 de l'Estatut General de l'Advocacia que es remet per als casos, allí previstos als articles 59 i 61, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les notificacions podran practicar-se en el domicili professional que el col·legiat tinga comunicat al Col·legi, en compliment de l'obligació establida en l'article 30 d'aquests Estatuts, amb plena validesa i sense perjudi de la responsabilitat que poguera derivar-se de no haver comunicat reglamentàriament el seu eventual trasllat. Si no poguera ser practicada la notificació en els termes previstos pels apartats 1 de l'article 59 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'entrega podrà realitzar-la un empleat del Col·legi amb subjecció a allò que s'ha assenyalat en els apartats 2 i 3 de l'expressat precepte; i si tampoc així no poguera practicar-se, es procedirà conforme a l'apartat 4, i serà preceptiva, a més, la inserció d'una anunci en el tauler d'edictes del Col·legi. En les notificacions que es practiquen per la via de l'apartat 3 de l'article 59 de l'esmentada Llei, es guardaran les formalitats que estableix l'article 61 de la mateixa norma.

5. Pròrrogues de termini. Els terminis establits en el procediment disciplinari seran prorrogables, excepte disposició expressa en contra, a proposta raonada de l'instructor de l'expedient, aprovada per la Junta de Govern, aprovació que haurà d'efectuar-se en tot cas abans del seu venciment. L'acord sobre la pròrroga, que es notificarà al col·legiat afectat o recurrent no serà recurrible, sense perjudi que el que puga ser al·legat pels interessats per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment i en l'eventual impugnació de tals actes en els ulteriors recursos que, si és el cas, s'interposen contra aquesta.

6. Resolució del procediment. La resolució que pose fi al procediment disciplinari haurà de ser acordada en el termini màxim de trenta dies des de la recepció de la proposta de l'instructor. Haurà de ser motivada, resoldrà totes les qüestions plantejades en l'expedient i no podrà acceptar fets

2. Del procediment per a la sanció de faltes greus o molt greus. Les infraccions greus i molt greus seran sancionades per la Junta de Govern, prèvia l'obertura de l'expedient disciplinari, tramitat d'acord amb el que disposa aquest Estatut amb aplicació del que estableix l'article 99.2 de l'Estatut General de l'Advocacia i s'estarà, en el no-previst en aquest, al que disposen les normes de procediment sancionador contingudes en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i normativa de desplegament. No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penalment, en els casos en què s'aprecie identitat de subjecte, fet i fonament. Quan s'estiga tramitant un procés penal pels mateixos fets o per altres la separació dels sancionables del qual, d'acord amb aquest Estatut, siga racionalment impossible, el procediment serà suspès en la seua tramitació. La represa del procediment disciplinari quedarà demorada fins que recaiga pronunciament ferm de l'autoritat judicial. Una vegada iniciat el procediment, en qualsevol moment en què l'instructor aprecie que la presumpta infracció pugua ser constitutiva d'infracció penal per delictes o falta, ho posarà immediatament en coneixement de la Junta de Govern, perquè aquesta decidisca sobre la comunicació dels fets al Ministeri Fiscal i resolga la suspensió del procediment fins que recaiga pronunciament ferm de l'autoritat judicial, si és el cas. Represa la tramitació de l'expedient disciplinari en qualsevol dels supòsits mencionats, la resolució que es dicte haurà de respectar l'apreciació dels fets que continga l'esmentat pronunciament judicial.

3. Mesures de caràcter provisional. En l'acord d'iniciació o, després d'aquest, a proposta de l'instructor, la Junta de Govern, amb caràcter motivat i amb audiència prèvia a l'interessat, podrà adoptar les següents mesures de caràcter provisional:

a) Suspensió en l'exercici de la professió. Aquesta mesura serà preceptiva si l'inculpat estiguera subjecte a orde de processament o a inculpació en un procés penal. La suspensió provisional en l'exercici de la professió podrà prolongar-se mentre dure el processament o la inculpació, sense que afecte el manteniment d'aquesta la situació de suspensió del procediment prevista en l'article anterior.

b) Suspensió en el servei de torn d'ofici i d'assistència jurídica gratuïta, amb l'abast que considere la Junta de Govern, quan s'entenga que la prosecució en els esmentats serveis pugua ser perjudicial per a l'esmentat servei,

h) L'exercici professional en situació d'embriaguesa, o amb l'influx de drogues tòxiques.

i) L'exercici de l'activitat professional pels advocats inscrits ometent expressa menció al títol professional d'origen.

Article 73. Faltes lleus

Són infraccions lleus:

a) La falta de respecte als membres de la Junta de Govern en l'exercici de les seues funcions, quan no constituïska cap infracció molt greu o greu.

b) La negligència en el compliment de les normes estatutàries.

c) L'incompliment lleu dels deures que la professió imposa.

d) Els actes o omissions enumerats en l'article anterior quan no tingueren entitat suficient per a ser considerats com a greus.

Article 74. Sancions

1 Les sancions que poden imposar-se per infraccions molt greus seran les següents:

a) Per a les dels paràgrafs b), c), d), e), f), g), h), i i) de l'article 71, suspensió de l'exercici de l'advocacia per un termini superior a tres mesos sense excedir dos anys.

b) Per a les dels paràgrafs a), j) i k) del mateix article, expulsió del Col•legi.

2. Per infraccions greus podrà imposar-se la sanció de suspensió de l'exercici de l'advocacia per un termini no superior a tres mesos.

3. Per infraccions lleus podran imposar-se les sancions d'amonestació privada o la d'advertència per escrit.

Secció tercera. Dels procediments

Article 75. Procediment sancionador

1. Del procediment per a la sanció d'infraccions lleus. Si l'acord d'iniciació del procediment estableix com a possible qualificació d'una infracció com a lleu, s'oferirà a l'inculpat el termini de deu dies perquè al•legue el que tinga per convenient, si de les actuacions de l'instructor proposara una sanció lleu o l'arxivament d'actuacions, elevarà tal proposta a la Junta de Govern sense més tràmit. La Junta de Govern acordarà allò que corresponga.

f) La realització d'activitats, constitució d'associacions o pertinença a aquestes, quan tinguen com a fins o realitzen funcions que siguen pròpies i exclusives dels col·legis d'Advocats.

g) La comesa d'una infracció greu, han sigut sancionat per la comissió d'altres dos del mateix caràcter i la responsabilitat de la qual no s'haja extingit conforme a l'article 81.

h) L'afavoriment de l'intrusisme professional i el seu encobriment.

i) La cooperació necessària de l'advocat amb l'empresa o persona a qui preste els seus serveis, perquè s'apropien d'honoraris professionals abonats per tercers i que no li hagueren sigut prèviament satisfets, quan d'acord amb el que disposa l'article 65.2 tals honoraris corresponguen a l'advocat.

j) La condemna d'un col·legiat en sentència ferma a penes greus conforme a l'article 33.2 del Codi Penal.

k) El deliberat i persistent incompliment de les normes deontològiques essencials en l'exercici de l'advocacia.

Article 72. Faltes greus

Són infraccions greus:

a) L'incompliment greu de les normes estatutàries o dels acords adoptats pels òrgans col·legials en l'àmbit de la seua competència, així com pel reiterat incompliment de l'obligació d'atendre les càrregues col·legials previstes en l'article 37, paràgraf a), llevat que constituïska infracció de més gravetat.

b) L'exercici professional en l'àmbit territorial del Col·legi que ometa deliberadament la comunicació, conforme a l'article 15 dels presents Estatuts.

c) La falta de respecte, per acció o omissió, als components de la Junta de Govern, quan actuen en l'exercici de les seues funcions.

d) Els actes de desconsideració manifesta cap als companys en l'exercici de l'activitat professional, i la infracció del que disposa l'article 39 sobre vènia.

e) La competència deslleial, quan així haja sigut declarada per l'òrgan competent, i la infracció de les normes de publicitat, quan no constituïska infracció molt greu.

f) La temerària impugnació de les minuts dels companys, així com la reiterada formulació de minuts d'honoraris que siguen excessius.

g) Els actes i omissions descrits en els paràgrafs a), b), c) i d) de l'article anterior, quan no tingueren entitat suficient per a ser considerats com a molt greus.

Article 69. Dels procediments

1. Els procediments sancionadors s'iniciaran per acord de la Junta de Govern.

2. Per a la realització d'actes d'informació prèvia, el degà nomenarà un membre de la Junta de Govern que actuarà com a ponent.

3. De conformitat amb allò que ha previst l'article 88.3 de l'Estatut General de l'Advocacia, correspondrà la instrucció dels procediments disciplinaris a un instructor, assistit per un secretari, elegits per la Junta de Govern entre els col·legiats. No podran ser nomenats per aquestes funcions cap membre de la Junta de Govern.

4. A la vista d'allò que s'ha actuat, l'instructor elevarà a la Junta de Govern les propostes de sanció o arxiu de cada expedient disciplinari de la mateixa manera, l'instructor proposarà a la Junta de Govern les mesures de caràcter provisional a adoptar en cada cas.

Secció Segona. De les infraccions i sancions.

Article 70. Classes d'infraccions

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 71. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La infracció de les prohibicions establides en l'article 25 o del règim d'incompatibilitats, previst en l'article 26 dels presents Estatuts.

b) La publicitat de serveis professionals amb incompliment de les normes especificades en l'article 38, i qualsevol altra infracció que en els presents Estatuts tinguera la qualificació d'infracció molt greu.

c) La comesa de delictes dolosos, en qualsevol grau de participació, com a conseqüència de l'exercici de la professió, així com els actes i omissions que constituïsquen ofensa greu a la dignitat de la professió, a les regles ètiques que la governen i als deures establits en els presents Estatuts.

d) L'atemptat contra la dignitat o honor de les persones que constitueixen la Junta de Govern, quan actuen en l'exercici de les seues funcions, i contra els companys en ocasió de l'exercici professional.

e) L'embriaguesa o consum de drogues quan afecten greument l'exercici de la professió.

TÍTOL VII DE LA RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

CAPÍTOL PRIMER RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA

Secció Primera. Principis generals

Article 67. Responsabilitat disciplinària

1. Els col·legiats exercents i no exercents, estan subjectes a responsabilitat disciplinària en el cas d'infracció dels seus deures professionals o deontològics.

2. Les facultats disciplinàries de l'autoritat judicial sobre els advocats s'ajustaran al que disposen les lleis processals.

3. Les sancions o correccions disciplinàries que imposen els tribunals a l'advocat es faran constar en el seu expedient personal, sempre que es referisquen directament a normes deontològiques o de conducta que hagen d'observar en la seua actuació davant de l'administració de justícia. Les sancions disciplinàries corporatives es faran constar en tot cas en l'expedient personal del col·legiat.

Article 68. Competència per al seu exercici

1. La Junta de Govern és competent per a l'exercici de la potestat disciplinària, i s'atendrà a les normes següents:

a) S'estendrà a la sanció d'infracció de deures professionals o normes ètiques de conducta en quant afecten la professió.

b) Es declararà prèvia la formació d'expedient seguit pels tràmits que s'estableixen en aquest Estatut, segons el que estableix l'article 88.2 de l'Estatut General de l'Advocacia.

2. Les correccions que podran aplicar-se són les següents:

a) Amonestació privada.

b) Advertència per escrit.

c) Suspensió de l'exercici de l'advocacia per un termini no superior a dos anys.

d) Expulsió del Col·legi.

TÍTOL VI

HONORARIS PROFESSIONALS

Article 65. Dret a la seua percepció

1. L'advocat té dret a una compensació econòmica adequada pels serveis prestats, així com al reintegrament de les despeses que se li hagen causat.

2. La quantia dels honoraris serà lliurement convinguda entre el client i l'advocat, amb respecte a les normes deontològiques i de competència deslleial. A falta de pacte exprés en contra, per a la fixació dels honoraris es tindran en compte, com a referència, el barem d'honoraris professionals que tindrà caràcter merament orientatiu aprovat pel Col·legi d'Advocats d'Alzira o el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana que, en tot cas, tindran caràcter supletori del que convé. Els honoraris professionals a càrrec de la part vençuda en costes en un litigi es determinaran d'acord amb les quantitats resultants d'aplicar estrictament i exclusivament el referit barem d'honoraris professionals.

3. La compensació econòmica podrà assumir la forma de retribució fixa, periòdica o per hores. Respecte a les costes recobrades de tercers, caldrà ajustar-se al que lliurement acorden les parts, que a falta de pacte exprés hauran de ser satisfetes efectivament a l'advocat.

4. Es prohibeix, en tot cas, la quota litis en sentit estricte, i s'entendrà per tal l'acord entre l'advocat i el seu client, previ a l'acabament de l'assumpte, en virtut del qual aquest es compromet a pagar-li únicament un percentatge del resultat de l'assumpte, independentment que consistisca en una suma de diners o qualsevol altre benefici, bé o valor que aconseguisca el client per aqueix assumpte.

Article 66. Facultats de la Junta de Govern

En relació amb els honoraris professionals, la Junta de Govern podrà:

a) Publicar i revisar periòdicament el barem d'honoraris que tindrà el caràcter merament orientatiu per a la percepció d'honoraris professionals.

b) Realitzar les funcions que li conferisca el Reglament regulador del servei de cobrament d'honoraris, en els termes que approve la Junta General.

al control del seu exercici, a l'exigència de les responsabilitats disciplinàries a què haguera lloc i a l'establiment de les normes i requisits a què haja d'atenir-se la prestació dels serveis corresponents, tot això d'acord amb la legislació vigent.

2. L'administració pública abonarà la remuneració dels serveis que es presten en compliment del que estableix aquest capítol i podrà efectuar el seguiment i control periòdic del funcionament del servei i de l'aplicació dels fons públics a aquests destinats, en la forma legalment establida.

Article 64. Requisits generals

1. Amb caràcter general, els advocats adscrits als torns d'ofici o de defensa al detingut, hauran de reunir en tot moment, les següents condicions, sense perjuí de complir els altres requisits i tràmits que acorde la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats d'Alzira:

a) Estar incorporats com a exercents en aquest Col·legi, al temps d'haver de començar i seguir les seues actuacions.

b) No estar sotmés a cap expedient disciplinari ni haver sigut sancionat corporativament.

c) Tindre complides les seues obligacions econòmiques tant de respecte al Col·legi d'Advocats d'Alzira com, si és el cas, respecte a la Mutualitat General de Previsió de l'Advocacia o Règim de Seguretat Social que corresponga, d'acord amb la legislació vigent i en general, estar al corrent en tot moment en les seues obligacions de contribuir a l'alçament de les càrregues corporatives.

2. La Junta de Govern podrà excloure dels torns els qui, per la seua prestació de serveis a la funció pública o empresarial, estiguen subjectes al compliment d'un horari, que els impossibilita o obstaculitze greument el bon compliment de les obligacions inherents al funcionament del torn d'ofici o del torn d'assistència al detingut, l'atenció del qual ha de cuidar-se en tot moment amb el màxim zel i diligència.

TÍTOL V

TORN D'OFICI I TORN D'ASSISTÈNCIA A DETINGUTS

Article 62. Competència

1. Correspon al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats d'Alzira la regulació i organització dels serveis d'assistència lletrada i de defensa i representació gratuïtes, i garantir, en tot cas, la seua continuïtat atenent els principis d'eficiència i funcionalitat, de distribució objectiva i equitativa dels distints torns i mitjans i, quan el cens dels professionals ho permeta, d'especialització per òrgans jurisdiccionals. La Junta de Govern establirà les normes per al seu repartiment entre els advocats que ho sol·liciten, així com els requisits que hagen de complir aquells que hagen de prestar-ho o vullguen.

2. Els advocats exerciran les funcions a què es referix el paràgraf precedent amb la llibertat i independència professionals que els són pròpies i d'acord amb les normes ètiques i deontològiques que regeixen la professió, sense perjudici de les limitacions de la normativa que regula el dret d'assistència jurídica gratuïta. Correspon als advocats l'assessorament jurídic i defensa d'ofici de les persones que tinguen dret a l'assistència jurídica gratuïta, d'acord amb la legislació vigent i en els altres casos legalment previstos.

3. Així mateix, correspon als advocats l'assistència i defensa dels que sol·liciten la designació d'advocat d'ofici o no designen advocat en la jurisdicció penal, sense perjudici de l'abonament d'honoraris pel client si no li fóra reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta. La invocació del dret d'autodefensa no impedirà l'assistència d'advocat per a atendre els assessoraments que respecte d'això se li sol·liciten i assumir la defensa, si se li demanara.

4. Igualment, correspon als advocats l'assistència als detinguts i presos, en els termes que expresse la legislació vigent.

Article 63. Funcionament

1. El desenrotllament de les esmentades funcions serà organitzat pel Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i el Col·legi d'Advocats d'Alzira, i es procedirà a la designació de l'advocat que haja d'assumir cada assumpte,

d'advocat exercent en l'àmbit territorial de l'article 2 d'aquests Estatuts serà el Col·legi d'Advocats d'Alzira.

Article 60. Informació relativa als advocats amb títol espanyol que s'inscriuen en altres estats membres

1 Quan un advocat pertanyent a aquest Col·legi s'inscriba davant de l'autoritat competent d'un altre estat membre per a exercir en aquest de forma permanent amb tal títol, serà el Col·legi d'Advocats d'Alzira el competent per a rebre la comunicació que, respecte d'això, ha de cursar l'autoritat competent de l'esmentat estat membre.

2. El Col·legi d'Advocats mantindrà actualitzada una llista amb els advocats a què es referix l'apartat anterior, per tal de complir amb les obligacions d'informació i col·laboració establides en la Directiva 98/5/CE.

3 La llista a què es referix l'apartat anterior serà notificada al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, al Consell General i al Ministeri de Justícia.

Article 61. Legislació aplicable

En tot el no-previst en els presents Estatuts s'aplicarà la normativa estatal, especialment, el Reial Decret 936/2001.

vocat obtingut en el país d'origen, a l'empara del que disposa l'Orde del Ministeri de Justícia, de 30 d'abril de 1996.

Article 57. Termini per a resoldre les sol·licituds

1. El termini de tres mesos previst en els presents Estatuts per a resoldre les sol·licituds d'integració en la professió, se suspendrà quan l'interessat no acompanye els documents necessaris o hi haja dubtes respecte a la seua legitimitat o certesa. Així mateix, s'interromprà sempre que el procediment es paralitze, durant més de deu dies per causes imputables a l'interessat.

2. Excepcionalment, podrà acordar-se mitjançant una resolució motivada l'ampliació del termini màxim de resolució i notificació només una vegada esgotats tots els mitjans a disposició possibles. Si s'acorda l'ampliació del termini, aquest no podrà ser superior a 45 dies.

3. Contra l'Acord que decidisca l'ampliació del termini que haura de ser notificat als interessats, no podrà interposar-se cap recurs.

Article 58. Comunicació de la resolució adoptada i de les col·legiacions

Una vegada adoptada pel Col·legi la resolució que corresponga, es traslladarà aquesta al Consell General de l'Advocacia, al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, a l'autoritat competent de l'Estat d'origen de l'interessat i al Ministeri de Justícia.

CAPÍTOL TERCER ADVOCATS PERTANYENTS AL COL·LEGI D'ALZIRA QUE EXERCISQUEN PERMANENTMENT AMB TÍTOL ESPANYOL EN ALTRES ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA O EN ALTRES ESTATS MEMBRES DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

Article 59. Autoritat competent per a certificar la condició d'advocat

L'autoritat competent per a certificar, davant de les autoritats de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu la condició

amb la quota que va pagar, en el seu moment, per a la seua inclusió al Registre d'Advocats inscrits. Formalitzada la col·legiació, l'interessat tindrà la condició d'advocat a tots els efectes, i seran d'aplicació, sense limitació ni cap especialitat, els presents Estatuts i les normes reguladores de la professió, i tindrà dret a utilitzar el títol professional d'advocat, i s'afegirà, si ho desitja, menció del títol professional d'origen. La resolució podrà acordar alternativament que el sol·licitant se sotmeta a una entrevista amb la Comissió d'Admissions nomenada per la Junta de Govern i composta per tres dels seus membres, per considerar que no ha quedat acreditada una activitat efectiva i regular a Espanya, d'una duració mínima de tres anys, però de menor duració en matèries relatives al dret espanyol. En aquest supòsit la mateixa resolució fixarà la data en què el sol·licitant ha de sotmetre's a l'entrevista que, en tot cas, haurà de celebrar-se dins del termini de 15 dies comptats a partir de la notificació al sol·licitant de la resolució que acorde l'entrevista amb la Comissió d'Admissions. També se li notificarà la identitat dels membres que integren la Comissió d'Admissions, i se'ls podrà recusar si concorren les causes d'abstenció i recusació previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Els advocats amb què haguera actuat concertadament l'advocat inscrit, o que hagueren pertangut al mateix despatx professional, no podran formar part de la Comissió d'Admissions. La incompareixença del sol·licitant a l'entrevista suposarà automàticament la denegació de la sol·licitud d'integració en la professió. Després de la celebració de l'entrevista, la finalitat de la qual serà verificar el caràcter efectiu i regular de l'activitat exercida, i després de prendre en consideració tota la informació i documentació aportada en relació amb els assumptes tractats pel sol·licitant, i en relació amb els seus coneixements i experiència professional en dret espanyol, i també quant a la seua participació en cursos o seminaris relatius a l'esmentat dret, incloses les normes deontològiques, la Comissió d'Admissions proposarà, en el termini de 3 dies, a la Junta de Govern la resolució que procedisca. La Junta de Govern decidirà finalment bé autoritzant la integració en la professió sense necessitat de tramitar el procediment de reconeixement del títol professional, bé denegant l'esmentada integració, amb els efectes que en cada cas procedisquen.

2. La denegació de la sol·licitud no impedeix que l'interessat pugua continuar exercint a Espanya sota la seua condició d'advocat inscrit, i podrà sol·licitar, en tot cas, el reconeixement a Espanya del títol professional d'ad-

2. Per activitat efectiva i regular s'entendrà l'exercici efectiu de l'activitat professional pròpia de l'advocacia, sense una altra interrupció que la que resulte d'esdeveniments de la vida corrent.

Article 55. Procediment per a la col·legiació.

1. La sol·licitud haurà de formular-se davant de la Junta de Govern del Col·legi, i haurà d'acompanyar els informes i documentació que considere pertinents, relatius en particular al número i naturalesa dels assumptes que haja tractat.

2. Rebuda tota la informació, el Col·legi procedirà a analitzar i valorar tota la documentació que el sol·licitant haja presentat.

3. Amb caràcter previ a l'adopció de la resolució que corresponga, el Col·legi sol·licitarà informe al Consell General de l'Advocacia Espanyola. L'informe s'entendrà favorable si no s'emet en el termini d'un mes.

Article 56. Resolució del procediment

1. Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de col·legiació, la Junta de Govern adoptarà la corresponent resolució motivada en què concedisca o denegue la sol·licitud. L'esmentada resolució serà susceptible de recurs d'alçada, conforme l'article 119 d'aquests Estatuts. El contingut de la resolució podrà ser:

a) Desestimatori, si es considera no acreditat un exercici efectiu i regular a Espanya durant almenys tres anys en els termes de l'article 17 del Reial Decret 936/2001, o per considerar que concorren motius d'orde públic relacionats amb procediments disciplinaris, queixes o incidents de qualsevol tipus.

b) Estimatori de la sol·licitud el que tindrà com a conseqüència la integració del sol·licitant en l'Advocacia espanyola, sense necessitat de tramitar el procediment de reconeixement de títol professional mencionat en l'Orde del Ministeri de Justícia, de 30 d'abril de 1996, per considerar que ha quedat acreditada una activitat efectiva i regular a Espanya, d'una duració mínima de tres anys, en l'àmbit del dret espanyol, inclòs el dret comunitari. Per a fer efectiva la mencionada integració l'interessat haurà d'omplir els oportuns tràmits de col·legiació previstos en els presents Estatuts, sempre que no hagueren sigut ja exigits en la inscripció, i s'haurà d'abonar, si és el cas, com a quota d'ingrés la que siga exigida a la resta de col·legiats, minorada

l'estat membre d'origen de l'advocat inscrit, i es proporcionarà tota la informació pertinent.

b) Sense perjudici del poder de decisió que correspon al Col·legi, aquest cooperarà al llarg de la tramitació amb l'autoritat competent de l'estat membre d'origen, i s'assegurarà que l'esmentada autoritat pugui formular alegacions en les distintes fases i instàncies de la tramitació, així com en els possibles recursos.

c) Si durant la tramitació de l'expedient disciplinari, l'autoritat competent de l'estat membre comunica al Col·legi que ha decidit retirar a l'advocat, temporalment o definitivament, l'autorització per a l'exercici de la professió, el Col·legi procedirà, igualment, a prohibir-li temporalment o definitivament l'exercici a Espanya, amb el títol professional d'origen, sense perjudici de la resolució que finalment es dicte en el procediment disciplinari.

d) La resolució final del procediment disciplinari, degudament motivada, serà comunicada immediatament pel Col·legi a l'autoritat competent de l'Estat d'origen.

3. Les comunicacions entre el Col·legi i l'autoritat competent de l'Estat d'origen es realitzaran amb la intermediació del Consell General de l'Advocacia.

CAPÍTOL SEGON INTEGRACIÓ EN LA PROFESSIÓ

Article 54. Integració en la professió

1. Els advocats que exercisquen en l'àmbit territorial d'aquest Col·legi amb el seu títol professional d'origen i que hagen formalitzat la seua inscripció, d'acord amb el que disposa el capítol anterior, podran sol·licitar i obtenir la integració en la professió, sense necessitat de tramitar el procediment de reconeixement del seu títol professional regulat en l'Orde del Ministeri de Justícia, de 30 d'abril de 1996, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 1665/1991, de 25 d'octubre, de 1991 sobre reconeixement de títols d'ensenyament superior de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats parts en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una formació superior mínima de tres anys, pel que afecta les professions d'advocat i procurador (BOE 112/1996, de 08-05-1996), sempre que acrediten una activitat efectiva i regular a Espanya d'una duració mínima de tres anys, conforme al procediment establert en els articles següents.

quedaran subjectes als mateixos drets, deures, obligacions, prohibicions i incompatibilitats establides en els presents Estatuts, llevat de les excepcions expressament previstes en el Reial Decret 936/2001, pel qual es regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat, amb títol professional obtingut en un altre estat membre de la Unió Europea (BOE 186/2001, de 04-08-2001).

2. La retirada, temporal o definitiva, de l'autorització per a exercir la professió en l'Estat d'origen, acordada per l'autoritat competent de l'esmentat Estat, comportarà per a l'advocat inscrit la prohibició, temporal o definitiva, d'exercir a l'àmbit territorial d'aquest Col·legi amb el títol professional d'origen.

Article 52. Obligació d'exercir amb expressa menció del títol professional d'origen

1. Els advocats que exercisquen en l'àmbit territorial del present Col·legi, amb el seu títol professional d'origen, estan obligats a fer-ho amb menció expressa de tal circumstància, i hauran d'utilitzar, en qualsevol cas, la denominació que corresponga, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 936/2001, i quedarà prohibida la denominació d'advocat, expressada en qualsevol de les llengües oficials d'Espanya. Quan la denominació del títol professional siga coincident en més d'un estat membre, o quan així ho considere l'advocat inscrit, s'afegirà al títol professional una menció expressa del país d'origen. Així mateix, quan la regulació de la professió en el país d'origen implique limitacions o especialitats quant a l'àmbit d'activitat de l'advocat inscrit, aquest haurà d'afegir també una menció de l'organització professional a què pertanga en l'esmentat país i, si fa al cas, de l'òrgan o òrgans jurisdiccionals davant dels quals estiga habilitat per a exercir.

Article 53. Responsabilitat disciplinària

1. Quan un advocat inscrit incomplisca les obligacions professionals o deontològiques previstes en els presents Estatuts, estarà subjecte a la mateixa responsabilitat disciplinària que la resta de col·legiats del present Col·legi.

2. L'expedient disciplinari es tramitarà de conformitat amb el que disposen els presents Estatuts, amb les especificacions següents:

a) Amb anterioritat a la incoació del corresponent expedient disciplinari, el Col·legi informarà, pel mitjà més ràpid possible, l'autoritat competent de

4. Els advocats inscrits i no col·legiats desenvoluparan la seua professió concertadament amb un advocat col·legiat al Col·legi d'Alzira, en les activitats de defensa del client, quan en aplicació de la legislació espanyola siga preceptiva la intervenció d'advocat per a les actuacions davant de jutjats i tribunals o davant d'organismes públics amb funcions jurisdiccionals, així com per a l'assistència, comunicació i visites amb detinguts i presos. També caldrà aquesta concertació quan, fins i tot no sent preceptiva la intervenció d'advocat, la llei exigisca que si l'interessat no intervé per si mateix davant l'òrgan judicial, no puga fer-ho una altra persona que no siga advocat. L'advocat amb qui s'actue concertadament respondrà davant dels òrgans jurisdiccionals i organismes públics.

Article 50. Registre d'advocats inscrits

1. El Col·legi portarà un registre especial dels advocats d'altres estats membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu, que pretenen exercir al Regne d'Espanya. El Col·legi, a través del Consell Valencià, comunicarà al Consell General de l'Advocacia, en el termini màxim de quinze dies, comptadors a partir de la inscripció, la mateixa, amb especificació de l'autoritat competent de l'estat membre d'origen de l'interessat, per tal que el Consell General, en els quinze dies següents, informe d'això a l'esmentada autoritat, així com al Ministeri de Justícia.

2. En la llista dels advocats exercents, incorporats al Col·legi, prevista en l'article 23 dels presents Estatuts, s'inclourà els noms dels advocats pertanyents a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu inscrits, amb especial menció de tal circumstància, així com del país d'obtenció del títol professional, amb el que exerceixen a Espanya.

Article 51. Principi d'assimilació de l'advocat inscrit amb l'advocat local

1. En relació amb les activitats que exercisquen, amb el seu títol professional d'origen en l'àmbit territorial del Col·legi, els advocats procedents d'altres Estats de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, inscrits en el present Col·legi, els serà aplicable, amb caràcter general, les mateixes regles professionals i deontològiques que els advocats incorporats a aquest Col·legi. Tot això, sense perjudi de la normativa professional i deontològica a què estiguen subjectes en el seu Estat membre d'origen. En especial,

TÍTOL IV
ADVOCATS PROCEDENTS DE UN ALTRE ESTAT
MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ESTATS DE
L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

CAPÍTOL PRIMER
EXERCICI A ESPANYA AMB EL TÍTOL PROFESSIO-
NAL DE ORIGEN

Article 49. Exercici en el territori del Col·legi

1. Els advocats pertanyents a altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, podran exercir en el territori de competència del Col·legi d'Advocats d'Alzira, de conformitat amb la legislació aplicable, i quedaran subjectes, en tot cas, a les mateixes regles professionals i deontològiques que la resta d'advocats que exercisquen en aquest territori.

2. Els advocats procedents d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'estats inclosos en l'Espai Econòmic Europeu, el domicili professional únic o principal dels quals, en el territori espanyol, radique en l'àmbit territorial d'aquest Col·legi, hauran d'inscriure's prèviament al Registre Especial constituït a aquest efecte.

3. La sol·licitud d'inscripció haurà de realitzar-se omplint el formulari facilitat pel mateix Col·legi, acompanyat de la documentació prevista en l'article 5 del Reial Decret 936/2001, de 3 d'agost, pel qual es regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat, amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea (BOE 186/2001, de 04-08-2001), així com la documentació que acredite el compliment dels requisits previstos en l'article 8 dels presents Estatuts. La quota d'incorporació que establisca la Junta de Govern, per als advocats pertanyents a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, que pretenguen exercir amb el títol professional d'origen en l'àmbit territorial del Col·legi, no podrà ser superior, en cap cas, a l'exigida a la resta de col·legiats, i resultarà adequada al manteniment de les càrregues col·legials en proporció als serveis dels quals puguen beneficiar-se aquests advocats. La Junta de Govern decidirà motivadament sobre la sol·licitud d'inscripció, en el termini màxim de dos mesos des de la seua presentació, transcorregut el qual es considerarà admesa.

a) Que l'agrupació tinga com a objecte la prestació de serveis conjunts determinats, inclosos els serveis jurídics específics que es complementen amb els de les altres professions.

b) Que l'activitat a exercir no afecte el correcte exercici de l'advocacia pels membres advocats.

c) Que es complisquen les condicions establides en l'article anterior en allò que afecte l'exercici de l'advocacia, llevat d'allò que s'ha expressat sota l'apartat 2 d'aquest, que no resultarà aplicable, o en l'apartat 5 de què només serà aplicable l'obligació de deixar constància de la condició de membre del col·lectiu multiprofessional en les actuacions que es realitzen i minutes que s'emeten en el seu àmbit.

2. Les agrupacions en règim de col·laboració multiprofessional han d'inscriure's al Registre Especial que a aquest efecte es portarà al Col·legi.

3. Els membres advocats hauran de separar-se quan qualsevol dels seus integrants incomplisca les normes sobre prohibicions, incompatibilitats o deontologia pròpies de l'advocacia.

CAPÍTOL SISÉ

COL·LEGIATS NO EXERCENTS

Article 48. Col·legiats no exercents

1. Pertanyen al Col·legi d'Advocats, en qualitat de col·legiats no exercents, els qui ja figuren incorporats amb tal condició o s'incorporen d'ara en avant, sempre que reunisquen els requisits establits en l'article 8.1 d'aquests Estatuts.

2. Els qui pertanguen a aquest Col·legi, en qualitat de no exercents, tindran els drets que es reconeixen en l'article. 36, a) i b) i les obligacions descrites en els articles 28, 29 i 37, a i b), i els serà prohibida la defensa d'interessos jurídics aliens, i, en general, l'exercici de les activitats que requirisquen l'aplicació de tècnica jurídica reservada als advocats.

plena independència per a dirigir la defensa dels interessos que tinguen encomanats. Les substitucions que es produïsqen s'atindran a les normes de funcionament del respectiu despatx, Sense necessitar la sol·licitud de vènia interna. Els honoraris correspondran al col·lectiu, sense perjudici del règim intern de distribució que establisquen les referides normes.

6. L'actuació professional dels integrants del despatx col·lectiu estarà sotmesa a la disciplina col·legial, i respondrà, personalment, l'advocat que l'haja efectuat. No obstant això, s'estendran a tots els membres del despatx col·lectiu el deure de secret professional, les incompatibilitats que afecten qualsevol dels seus integrants i les situacions de prohibició d'actuar en defensa d'interessos contraposats amb els patrocinats per qualsevol d'ells.

7. La responsabilitat civil que poguera tindre el despatx col·lectiu, serà conforme al règim jurídic general que corresponga a la forma d'agrupació utilitzada. A més a més, tots els advocats que hagen intervingut en un assumpte respondran civilment davant del client amb caràcter personal, solidari i il·limitat.

8. Per a la millor salvaguarda del secret professional i de les relacions de companyonia, les normes reguladores del despatx col·lectiu podran sotmetre a arbitratge col·legial les discrepàncies que pogueren sorgir entre els seus membres a causa del funcionament, separació o liquidació de l'esmentat despatx.

9. Per tal de determinar la responsabilitat de cada un dels advocats membres d'un despatx col·lectiu, hauran d'establir-se, entre les normes de funcionament del despatx, el mecanisme per a fer constar davant de tercers la distribució interna d'assumptes. El secretari del Col·legi podrà diligenciar el document o documents en què es registre aquesta distribució de responsabilitats, si així ho sol·licitara el despatx.

10. No podrà compartir locals o serveis amb professionals incompatibles, si això afectara la salvaguarda del secret professional.

Article 47. Règim de col·laboració multiprofessional

1. Els advocats podran associar-se en règim de col·laboració multiprofessional amb altres professionals liberals no incompatibles, sense limitació de nombre i sense que això afecte la seua plena capacitat per a l'exercici de la professió davant de qualsevol jurisdicció i Tribunal, i utilitzaran qualsevol forma lícita en dret, incloses les societats mercantils, sempre que es complisquen les condicions següents:

les parts acorden que l'exercici professional haja de desenvolupar-se en règim d'exclusivitat, haurà de fer-se constar expressament en el contracte. En tot cas, en l'exercici professional sota aquesta modalitat, l'advocat tindrà dret, davant de l'ocupador, al respecte a la llibertat i independència bàsiques, per a l'exercici de la professió.

5. El Col·legi d'Advocats d'Alzira podrà exigir la presentació dels contractes de col·laboració i de treball, per tal de verificar que s'ajusten al que s'estableix en aquest Estatut. En les actuacions que realitze el col·laborador en règim especial, o en règim de dret laboral, per substitució o per delegació del despatx amb què col·labore, haurà de fer constar en nom i per compte de qui actua.

Article 46. Exercici col·lectiu

1. Els advocats podran exercir l'advocacia col·lectivament, mitjançant la seua agrupació sota qualsevol de les formes lícites en dret, incloses les societats mercantils.

2. L'agrupació haurà de tindre com a objecte exclusiu l'exercici professional de l'advocacia i estar integrada exclusivament per advocats en exercici, sense limitació de nombre. Tant el capital com els drets polítics i econòmics hauran d'estar atribuïts únicament als advocats que integren el despatx col·lectiu.

3. La forma d'agrupació haurà de permetre, en tot moment, la identificació dels seus integrants, i haurà de constituir-se per escrit i inscriure's al Registre Especial que a aquest efecte es portarà al Col·legi; en l'esmentat Registre s'inscriurà la seua composició i les altes i baixes que es produïsquen. Els advocats que formen part d'un despatx col·lectiu estaran obligats, personalment, a sol·licitar les inscripcions corresponents.

4. Els advocats agrupats en un despatx col·lectiu no podran tindre despatx independent del col·lectiu, i en les intervencions professionals que realitzen i en les minutes que emeten hauran de deixar constància de la seua condició de membres del referit col·lectiu. No obstant això, les actuacions corresponents a l'assistència jurídica gratuïta tindran caràcter personal, encara que podrà sol·licitar-se del Col·legi la seua facturació a nom del despatx col·lectiu.

5. Els advocats membres d'un despatx col·lectiu tindran plena llibertat per a acceptar o rebutjar qualsevol client o assumpte del despatx, així com

Article 45. Exercici individual

1. L'exercici individual de l'advocacia podrà desenvolupar-se per compte propi com a titular d'un despatx, o per compte d'altri, o com a col•laborador d'un despatx individual o col•lectiu. No es perdrà la condició d'advocat qui exerceix com a titular del seu despatx individual quan:

a) L'advocat tinga en el seu bufet passants o col•laboradors, amb relació laboral o sense amb aquests.

b) L'advocat compartisca el bufet amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

c) L'advocat compartisca els locals, instal•lacions, serveis o altres mitjans amb altres advocats, però mantenint la independència dels seus bufets, sense identificació conjunta d'aquest davant la clientela.

d) L'advocat concerte acords de col•laboració per a determinats assumptes o classes d'assumptes amb altres advocats o despatxos col•lectius, nacionals o estrangers, siga quina siga la seua forma.

e) L'advocat constituïska una societat unipersonal per al dit exercici de l'advocacia, que haurà d'observar, en quant pugua aplicar-se-li, el que disposa l'article següent per a l'exercici col•lectiu.

2. L'advocat titular d'un despatx professional individual respondrà, professionalment, davant del seu client de les gestions o actuacions que efectuen els seus passants o col•laboradors, sense perjudici de la facultat de repetir-ho davant d'aquests, si escau. No obstant això, els passants i col•laboradors queden sotmesos a les obligacions deontològiques i assumiran la seua responsabilitat disciplinària. Els honoraris a càrrec del client es meritiran a favor del titular del despatx, fins i tot en el cas que les actuacions foren realitzades per altres lletrats per delegació o substitució d'aquest, i, al seu torn, el titular del despatx respondrà personalment dels honoraris deguts als lletrats a qui encarregue o delegue actuacions, fins i tot, en el cas que el client deixara d'abonar-li'ls, llevat de pacte en contra.

3. L'exercici de l'advocacia per compte d'altri, en règim d'especial de col•laboració, haurà de pactar-se expressament per escrit, i es fixaran les condicions, duració, abast i règim econòmic de la col•laboració.

4. L'advocacia també podrà exercir-se per compte d'altri sota el règim de dret laboral, mitjançant contracte de treball formalitzat per escrit. En cas que

Secció tercera. En relació amb les parts.

Article 43. Respecte al seu client

1. Són obligacions de l'advocat, amb la part per ell defensa, a més de les que es deriven de les seues relacions contractuals, el compliment de la missió de defensa que li siga encomanada amb el màxim zel i diligència, i guardarà, especialment, el deure de secret professional.

2. L'advocat realitzarà diligentment les activitats professionals que li impose la defensa de l'assumpte encomanat, i s'atindrà a les exigències tècniques, deontològiques i ètiques adequades a la tutela jurídica de l'esmentat assumpte, i podrà auxiliar-se dels seus col·laboradors i altres companys, els quals actuaran sota la seua responsabilitat.

3. En tot cas, l'advocat haurà d'identificar-se davant de la persona a qui assessore o defense, fins i tot quan ho fera per compte d'un tercer, per tal d'assumir les responsabilitats civils, penals i deontològiques que, si fa al cas, corresponguen.

4. Si a l'advocat no li interessa continuar dirigint al client que se li haguera nomenat, estarà obligat a fer-li saber la renúncia, amb l'antelació necessària perquè no queden indefensos els interessos posats sota la seua empara. Comunicada la renúncia, l'advocat podrà depositar el document acreditatiu de la comunicació d'aquesta i la documentació que li haguera confiat al client a la seu del Col·legi d'Advocats, i farà constar aquest aspecte en la mateixa comunicació.

5. L'advocat està obligat a tornar puntualment al seu client la documentació que li haguera confiat, a l'acabament de la relació contractual, sense perjudici que pugua conservar còpia d'aquesta. No serà causa per a eximir-se d'aquesta obligació que se li dega qualsevol quantitat. Haurà de lliurar al seu client, a la seua petició, els documents obtinguts per l'advocat, els escrits i resolucions relacionades amb l'assumpte que li haguera encomanat, tot això amb despeses a càrrec del client. Aquest deure de conservació de documents i antecedents tindrà una durada màxima de sis anys.

Article 44. Respecte a la part contrària

Són obligacions de l'advocat, amb la part contrària, l'abstenció o omisió de qualsevol acte que determine una lesió injusta per a aquesta, i el tracte considerat i cortés.

4. L'advocat actuant podrà ser auxiliat o substituït, en l'acte de la vista o juí o en qualsevol altra diligència judicial per un company en exercici incorporat al Col·legi d'Advocats d'Alzira, o l'actuació de la qual haja estat degudament comunicada al Col·legi. Per a la substitució bastarà la declaració de l'advocat substituït, sota la seua responsabilitat.

5. Els advocats que es troben processats o encartats i es defensen a si mateixos, o col·laboren amb el seu defensor, usaran toga i ocuparan el lloc establert per als advocats.

6. Els advocats solament obligats a esperar un temps prudencial sobre l'hora assenyalada pels òrgans judicials, per a les actuacions en què intervindran; transcorregut el qual podran formular la pertinent queixa davant del mateix òrgan i informar del retard a la Junta de Govern del corresponent Col·legi, perquè aquesta pugua adoptar les iniciatives pertinents.

Article 41. Independència i llibertat d'actuació i dret a la consideració professional

Si l'advocat actuant considera que l'autoritat, Tribunal o Jutjat coarta la independència i llibertat necessàries per a complir amb els seus deures professionals, o que no se li guarda la consideració deguda a la seua professió, podrà fer-ho constar així davant del mateix Jutjat o Tribunal, sota la fe del secretari, o davant de l'autoritat sota la fe del funcionari, preferentment davant del qui exercira la fe pública administrativa, i donar compte a la Junta de Govern. La Junta, si estima fundada la queixa, adoptarà les mesures adients per a emparar la llibertat, independència i prestigi professionals.

Article 42. Necessitat identificació

1. En tot escrit que es dirigisca als jutjats i tribunals, en què siga preceptiva la signatura d'advocat, així com en les còpies per a trasllat a les parts, es farà constar, de forma llegible, el nom complet del col·legiat que ho subscriu i, si fa al cas, la data de la comunicació o habilitació prevista en els presents Estatuts.

2. El Col·legi d'Advocats d'Alzira podrà facilitar als seus advocats l'ús d'un segell amb l'emblema del Col·legi i el nom i número de col·legiat de l'advocat, per a facilitar-li la identificació professional i a aquests únics fins.

institucional que pugui realitzar-se en benefici de la professió en general.

3. Els advocats que presten els seus serveis, en forma permanent o ocasional a empreses individuals o col·lectives, hauran d'exigir que aquestes s'abstinguin d'efectuar publicitat respecte de tals serveis, que no s'ajuste a allò que s'ha establert en aquests Estatuts i en l'Estatut General de l'Advocacia.

Article 39. La vènia

1. Els advocats tenen plena llibertat d'acceptar o rebutjar la direcció de l'assumpte, així com de renunciar a aquest en qualsevol fase del procediment, sempre que no es produïska indefensió al client.

2. Els advocats que hagen d'encarregar-se de la direcció professional d'un assumpte, i encomanar-lo a un altre company en la mateixa instància, hauran de sol·licitar la seua vènia, llevat que hi haja renúncia escrita i incondicionada a prosseguir la seua intervenció per part de l'anterior advocat i, en tot cas, demanar d'aquest la informació necessària per a continuar l'assumpte.

3. La vènia, llevat cas d'urgència a justificar, haurà de ser sol·licitada amb caràcter previ i per escrit, sense que el lletrat requerit pugui denegar-la i amb l'obligació, per la seua banda, de tornar la documentació en el seu poder i facilitar al nou lletrat la informació necessària per a continuar la defensa.

4. L'advocat substituït tindrà dret a reclamar els honoraris que corresponguen a la seua intervenció professional i el substituït tindrà el deure de col·laborar diligentment en la gestió del seu pagament.

Secció Segona. En relació amb els tribunals

Article 40. Normes per a actuar davant dels tribunals

1. Són obligacions de l'advocat amb els òrgans jurisdiccionals: la probitat, lleialtat i veracitat quant al fons de les seues declaracions o manifestacions, i el respecte quant a la forma de la seua intervenció.

2. Els advocats compareixeran davant dels tribunals vestint toga, sense distintiu de cap classe, llevat del de col·legiat, i adequaran la seua indumentària a la dignitat i prestigi de la toga que vesteixen i al respecte a la Justícia.

3. Els advocats tindran dret a intervindre davant dels tribunals de qualsevol jurisdicció assentats dins de l'estrada, al mateix nivell en què es trobe instal·lat el Tribunal davant de qui actuen.

omissió del deure de comunicació, siga per suspensió o inhabilitació del denunciat, o per estar incurs en supòsits d'incompatibilitat o prohibició.

c) Denunciar al Col·legi qualsevol atemptat a la llibertat, independència o dignitat d'un advocat, en l'exercici de les seues funcions.

d) No intentar la implicació de l'advocat contrari en el litigi o interessos debatuts, ni directament ni indirectament, i evitar, fins i tot, qualsevol al·lusió personal al company i tractar-lo sempre amb la major correcció.

e) Evitar competències il·lícites respecte als companys de la professió, i complir els deures corporatius.

f) Mantindre com a matèria reservada les conversacions i correspondència hagudes amb l'advocat o advocats contraris, amb prohibició de revelar-los o presentar-los en judici sense el seu previ consentiment. No obstant això, per causa greu, la Junta de Govern del Col·legi podrà discrecionalment autoritzar la seua revelació o presentació en judici, sense l'esmentat consentiment previ.

Article 38. Publicitat

1. Els advocats pertanyents al Col·legi d'Advocats d'Alzira, podran realitzar publicitat dels seus serveis, sempre que siga digna, lleial i veraç, amb absolut respecte a la dignitat de les persones, a la legislació sobre publicitat, sobre defensa de la competència i competència deslleial, i s'ajustarà, en tot cas, a les normes deontològiques.

2. Es considerarà contrària a les normes deontològiques de l'advocacia la publicitat que suppose:

a) Revelar directament o indirectament fets, dades o situacions, emparats pel secret professional.

b) Incitar genèricament o concretament el plet o conflicte.

c) Oferir els seus serveis, per si o mitjançant tercers, a víctimes d'accidents o desgràcies, als seus hereus o als seus drethavents, en el moment en què no tenen plena i serena llibertat per a l'elecció d'advocat, per trobar-se patint l'esmentada recent desgràcia personal o colectiva.

d) Prometre l'obtenció de resultats, que no depenguen exclusivament de l'activitat de l'advocat.

e) Fer referència directa o indirecta a clients del mateix advocat.

f) Utilitzar els emblemes o símbols col·legials i aquells altres que per la seua similitud pogueren generar confusió, en reservar-se el seu ús per a la publicitat

Article 34. Consideracions honorífiques

L'advocat del Col·legi d'Alzira té dret a totes les consideracions honorífiques degudes a la seua professió i tradicionalment reconegudes.

Article 35. Protecció legal

Per a la protecció dels seus drets, els col·legiats podran fer ús de quants remeis o recursos estableix la legislació, i se subjectaran al règim jurídic vigent per a cada un d'ells.

Article 36. Drets corporatius

Són drets dels col·legiats:

a) Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir els drets de petició, de vot i d'accés als càrrecs directius, en la forma que establisquen les normes legals o estatutàries. El vot dels exercents tindrà, en tot cas, doble valor que el dels col·legiats no exercents.

b) Demanar i obtindre del Col·legi, del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i de tots els òrgans corporatius, la protecció de la seua independència i lícita llibertat d'actuació professional.

c) Conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels expedients, en què tinguen la condició d'interessat.

d) Formular moció de censura contra els membres de la Junta de Govern, en els termes regulats en els presents Estatuts.

e) Aquells altres que els confereixen els presents Estatuts, els del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i qualsevol altres disposicions de caràcter general.

Article 37. Deures corporatius

Són deures dels col·legiats:

a) Estar al corrent en el pagament de les seues quotes, ordinàries o extraordinàries, i abonar altres càrregues col·legials, qualsevol que siga la seua naturalesa, en la forma i terminis a aquest efecte establits. A tals efectes es consideren càrregues corporatives totes les imposades pel Col·legi, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i el Consell General de l'Advocacia, en el marc de les seues competències respectives.

b) Denunciar al Col·legi de tot acte d'intrusisme que arribe al seu coneixement, així com els casos d'exercici il·legal, siga per falta de col·legiació o

exercisquen la professió, dins de l'àmbit territorial de competència d'aquest Col·legi. S'exceptua d'aquest deure, de mantindre despatx obert, els advocats procedents d'altres col·legis, respecte dels quals s'entendrà complit aquest requisit pel fet de mantindre estudi professional al col·legi d'origen en què més habitualment exercisquen la professió.

2. Tots els col·legiats tenen l'obligació de comunicar al Col·legi els canvis de domicili professional, trasllats de veïnat i absències que hagen de prolongar-se per més de dos mesos consecutius. Les notificacions efectuades en el domicili professional, que conste al Col·legi, tindran plena validesa, sense perjudici de la responsabilitat que pugua derivar-se'n per no haver comunicat el seu eventual trasllat.

Article 31. Secret professional

1. De conformitat amb allò que ha establert l'article 542.3, de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els advocats hauran de guardar secret de tots els fets o notícies que coneguen, per raó de qualsevol de les modalitats de la seua actuació professional, i no podran ser obligats a declarar sobre aquests.

2. En el cas que el degà del Col·legi, o qui estatutàriament el substituïca, fóra requerit en virtut de norma legal, o avisat per l'autoritat judicial o governativa competent, per a la pràctica d'un registre en el despatx professional d'un advocat del Col·legi, aquest haurà de personar-se en el dit despatx i assistir a les diligències que es practiquen, per tal de vetlar per la salvaguarda del secret professional.

Article 32. Llibertat i independència

L'advocat, en compliment de la seua missió, actuarà amb tota llibertat i independència, i se subjectarà, per tant, a la Llei i a les normes ètiques i deontologia professional.

Article 33. Exercici de la seua funció

El deure de defensa jurídica que als advocats se'ls confia és també un dret per a aquests. En conseqüència podrà reclamar, tant de les autoritats com del Col·legi, i dels particulars, totes les mesures d'ajuda en l'exercici de la seua funció que els siguen legalment degudes.

que renuncia a l'exercici professional si no ho manifesta per escrit en el termini de trenta dies, amb la qual cosa automàticament serà donat de baixa en aquest.

2. La infracció de l'esmentat deure de cessar en la situació d'incompatibilitat, així com el seu exercici amb infracció de les incompatibilitats establides en l'article anterior, directament o per persona interposada, constituirà infracció molt greu, sense perjudici d'altres responsabilitats que li corresponguen.

CAPÍTOL CINQUÉ

DRETS I OBLIGACIONS DELS ADVOCATS

Secció Primera. Amb caràcter general

Article 28. Deures fonamentals

1. L'activitat d'advocat es durà a terme amb subjecció a les normes legals, estatutàries i deontològiques.

2. L'advocat, com a partícip en la funció pública de l'administració de justícia, ha de cooperar amb aquesta assessorant, conciliant i defensant en dret els interessos que li siguen confiats. En cap cas la tutela de tals interessos no pot justificar la desviació del fi suprem de justícia, a què l'advocacia es troba vinculada.

3. La defensa jurídica és una obligació professional, tant per a l'advocacia com per als advocats, que es complirà ajustant-se a normes deontològiques.

4. L'advocat té el dret i el deure de prestar el servei de torn d'ofici, en els termes que reglamentàriament establisca la Junta de Govern.

Article 29. Sotmetiment a normes i decisions del Col·legi d'Advocats d'Alzira i la resta d'òrgans rectors de l'advocacia

Els col·legiats queden sotmesos a l'Estatut General de l'Advocacia, als presents Estatuts i a les decisions de la Junta General, de la Junta de Govern i del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, com també als Estatuts d'aquest últim.

Article 30. Despatx professional

1. Els advocats d'aquest Col·legi hauran de mantindre despatx professional obert o estar adscrits a un despatx professional, en el lloc on habitualment

Article 26. Incompatibilitats

1. L'exercici de l'advocacia és incompatible amb qualsevol activitat que pugui suposar menyspreu de la llibertat, la independència o la dignitat que li són inherents. Igualment, l'advocat pertanyent a aquest Col·legi, que realitzi alhora qualsevol altra activitat que, per suposar un conflicte d'interessos impedisca respectar els principis del correcte exercici continguts en aquests Estatuts, haurà d'abstindre's de realitzar aquella que resulte incompatible amb el correcte exercici de l'advocacia.

2. Així mateix, l'exercici de l'advocacia serà absolutament incompatible amb:

a) L'exercici, en qualsevol concepte, de càrrecs, funcions o ocupacions en les administracions públiques, la mateixa normativa reguladora de les quals així ho especifiqui.

b) L'exercici de la professió de procurador, graduat social, agent de negocis, gestor administratiu i qualsevol altra, la mateixa normativa reguladora de la qual, així ho especifiqui.

c) El manteniment de vincles professionals amb càrrecs o professionals incompatibles amb l'advocacia, que impedisquen el correcte exercici d'aquesta.

3. En tot cas, l'advocat no podrà realitzar activitat d'auditoria de comptes o altres que siguin incompatibles amb el correcte exercici de l'advocacia, simultàniament per al mateix client o per als qui ho hagueren sigut en els tres anys precedents. No s'entendrà incompatible aquesta prestació si es realitza per persones jurídiques distintes i amb l'òrgan d'administració diferents.

4. L'exercici de l'advocacia és també incompatible amb la intervenció davant dels organismes jurisdiccionals, en els termes que estableixi la legislació aplicable. L'advocat, a qui afecte tal incompatibilitat, haurà d'abstindre's de la defensa que en tals assumptes li haja pogut ser encomanada. L'esmentada obligació d'abstenció s'entén sense perjudici del dret de recusació que pugui assistir al litigant contrari.

Article 27. Efectes

1. L'advocat, a qui afecte alguna de les causes d'incompatibilitat establides en l'article anterior, haurà de comunicar-ho sense cap excusa a la Junta de Govern del Col·legi i cessar immediatament en la situació d'incompatibilitat, i s'entendrà

çant l'exhibició del carnet, a què es referix l'article 17 d'aquests Estatuts.

2. Els advocats, que no figuren en la relació prevista en l'apartat anterior, hauran d'acreditar la condició d'advocat mitjançant certificat de trobar-se incorporats al Col·legi o documentació acreditativa d'haver efectuat la comunicació prevista en l'article 15 dels presents Estatuts.

3. El Col·legi d'Advocats d'Alzira podrà comprovar que els advocats que intervinguen a les oficines públiques i en actuacions judicials, es troben en situació col·legial regular, d'acord amb el que preveu aquests Estatuts. Secció Segona. Incapacitat, prohibicions, incompatibilitats i restriccions especials.

Article 24. Circumstàncies determinants de la incapacitat

1. Són circumstàncies determinants d'incapacitat per a l'exercici de l'advocacia:

a) Els impediments que, per la seua naturalesa o intensitat, no permeten el compliment de la missió de defensa dels interessos aliens que, als advocats, s'encomana.

b) La inhabilitació o suspensió expressa per a l'exercici de l'advocacia en virtut de resolució judicial o corporativa ferma.

c) Les sancions disciplinàries fermes, que comporten la suspensió de l'exercici professional o l'expulsió de qualsevol col·legi d'advocats.

2. La incapacitat desapareixerà quan cessen les causes que les hagueren motivat o s'haja extingit la responsabilitat disciplinària, conforme aquests Estatuts.

Article 25. Prohibicions

Els advocats tenen les següents prohibicions, la infracció de les quals se sancionará disciplinàriament:

a) Exercir l'advocacia estant incurs en causa d'incompatibilitat, inhabilitació o suspensió, així com prestar la seua signatura als qui, per qualsevol causa, no pugen exercir com a advocats.

b) Compartir locals o serveis amb professionals incompatibles, si això afectara la salvaguarda del secret professional.

c) Mantindre vincles associatius de caràcter professional, que impedisquen el correcte exercici de l'advocacia, atenent al que preveuen aquests Estatuts i, singularment, l'article 26.3.

CAPÍTOL QUART DE L'EXERCICI DE LA PROFESSION

Secció Primera. Dels advocats incorporats a aquest Col·legi

Article 21. Advocats

Tenen la condició d'advocats del Col·legi d'Advocats d'Alzira els qui, en qualitat d'exercent i complits els requisits necessaris per a això, es dediquen de forma professional a la direcció i defensa de les parts en qualsevol classe de processos, així com a l'assessorament i consell jurídic.

Article 22. Jurament o promesa

1. De conformitat amb la legislació vigent, els qui queden incorporats a aquest Col·legi, per a l'exercici de la professió d'advocat i que amb anterioritat no l'hagueren exercit, prestaran jurament o promesa de lleialtat a Sa Majestat el Rei i fidelitat a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic, i de fidel compliment de les obligacions i normes deontològiques de la professió d'advocat.

2. El jurament o promesa serà prestat davant de la Junta de Govern del Col·legi.

3. La Junta podrà autoritzar que el jurament o promesa es formalitze inicialment per escrit, amb compromís de la seua posterior ratificació pública. En tot cas, s'haurà de deixar constància en l'expedient personal del col·legiat de la prestació de l'esmentat jurament o promesa. La falta de prestació del jurament o promesa, el dia i hora que a aquest s'assenyale, farà, llevat de causa greu justificada, que quede en suspens l'anterior autorització fins que efectivament es complisca aquest requisit, per qui estiguen obligats a això.

Article 23. Justificació de la seua condició

1. A través del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, el Col·legi d'Advocats d'Alzira facilitarà als jutges i tribunals de la Comunitat Valenciana, així com als directors de centres penitenciaris i als cossos i forces de Seguretat una relació comprensiva dels advocats exercent incorporats al Col·legi. Als advocats que en aquella estigueren inclosos no podrà exigir-se'ls un altre comprovant per a l'exercici de la professió, llevat del de l'acreditació de la seua personalitat que, a efectes professionals, podrà realitzar-se mitjan-

intervenció que se sol·licite.

3 L'habilitació suposa, per a qui la rep, el gaudi, en relació amb l'assump-te o assumptes a què aconsegueix, de tots els drets concedits en general als advocats i l'assumpció de les correlatives obligacions, i aplicació del règim d'incapacitat, prohibició, incompatibilitat i restriccions per a l'exercici de la professió.

CAPÍTOL TERCER

PÈRDUA DE LA CONDICIÓN DE COL·LEGIAT

Article 20. Pèrdua de la condició de col·legiat

1. La condició de col·legiat es perdrà:

a) Per deixar de satisfer tant les quotes ordinàries o extraordinàries acordades, com les altres càrregues col·legials a què estiguera obligat.

b) Per condemna ferma que comporte la d'inhabilitació per a l'exercici de la professió.

c) Per sanció ferma d'expulsió del Col·legi, acordada en expedient disciplinari.

d) A petició de l'interessat.

e) Per defunció.

2. En tot cas, la pèrdua de la condició de col·legiat, per les causes expressades en els apartats a), b) i c) del número anterior, hauran de ser comunicades per escrit a l'interessat, moment en què produiran efectes, i seran igualment comunicades al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i al Consell General de l'Advocacia Espanyola.

3. En el cas de l'apartat a), els col·legiats podran reincorporar-se al Col·legi d'Advocats d'Alzira pagant allò que s'ha degut, els seus interessos al tipus legal dels diners, i la quantitat que corresponga com a reincorporació.

4. La Junta de Govern acordarà el passe a situació de no exercent d'aquells col·legiats en què concórrega alguna de les circumstàncies determinants d'incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici, mentre aquella subsistisca, sense perjudici que, si procedeix, resolga el que procedisca en via disciplinària.

CAPÍTOL SEGON MEMBRES DEL COL·LEGI

Article 16. Membres del Col·legi

1. Tindran la consideració de membres del Col·legi d'Advocats d'Alzira, els qui, com a exercents o no exercents, ja figuren incorporats o s'incorporen d'ara en avant, per a la qual cosa hauran de complir amb els requisits previstos en l'article 8 dels presents Estatuts.

2. No podrà limitar-se al Col·legi d'Advocats d'Alzira el nombre dels seus components, ni tancar-se temporalment o definitivament l'admissió de nous col·legiats que reunisquen les condicions assenyalades en aquests Estatuts o preceptes que els desenvolupen.

Article 17. Acreditació

Els col·legiats identificaran la seua personalitat i la seua condició, d'exercents o no exercents, mitjançant un carnet o targeta d'identitat en què figurarà la seua fotografia, i que s'ajustarà al model que en cada cas acorde la Junta de Govern. També podran usar una insígnia de solapa, segons model igualment aprovat per la Junta de Govern. Alhora que s'utilitzarà l'esmentat escut en les togues, i se situarà aquest escut a la part esquerra, mitjançant brodat en color negre.

Article 18. Col·legiats d'honor

Podran ser col·legiats d'honor del Col·legi d'Alzira els qui reben aquest nomenament per acord de la Junta General, a proposta de la de Govern, en atenció a mèrits o serveis rellevants prestats a favor de la professió o de l'advocacia en general.

Article 19. Habilitació per a defensar assumptes propis o de parents

1. No caldrà la incorporació al Col·legi d'Advocats d'Alzira per a la defensa d'assumptes propis o de parents, fins al tercer grau de consanguinitat o segon d'afinitat, sempre que l'interessat reunisca els requisits establits per l'article 8.1, paràgrafs a), b) i c) dels presents Estatuts, així com aquells que puguen establir les normes vigents.

2. Els qui es troben en aquesta situació seran habilitats pel degà per a la

ritorial d'aplicació de l'esmentat Acord sobre l'Espai Econòmic Europeus, d'acord amb la normativa vigent respecte d'això.

3. Els advocats de altres països podran exercir al territori del Col·legi d'Alzira, de conformitat amb la normativa vigent a aquest efecte i amb respecte al que estableixen els presents Estatuts.

Article 15. Deure de comunicació

1. L'advocat pertanyent al Col·legi d'Advocats d'Alzira, que vaja a intervenir en actuacions judicials que es desenvolupen en partits judicials corresponents a l'àmbit territorial d'altres col·legis d'advocats, llevat que es tracte d'un Col·legi d'Advocats de la Comunitat Valenciana, haurà de comunicar-ho al Col·legi en l'àmbit territorial del qual haja d'intervindre directament i al Consell General, a través del Col·legi d'Advocats d'Alzira. L'advocat pertanyent a un altre col·legi, que realitze una actuació professional a l'àmbit territorial del Col·legi d'Advocats d'Alzira, haurà de comunicar-ho a través del seu col·legi. La comunicació produirà efectes des de la seua presentació, sense perjudici que es demane, del col·legi d'origen, que el comunicant està incorporat a aquest i no està sancionat o incapacitat per a l'exercici professional en cap col·legi d'Espanya.

2. En les actuacions professionals que duga a terme en l'àmbit territorial d'un altre Col·legi, l'advocat estarà subjecte a les normes d'actuació, deontologia i règim disciplinari d'aquest. L'esmentat Col·legi protegirà la seua llibertat i independència en la defensa, i serà competent per a la tramitació i resolució dels expedients disciplinaris que procedisquen, sense perjudici que l'eventual sanció produísca efectes en tots els col·legis d'Espanya, per a la qual cosa es comunicarà al Consell General.

3. La incorporació o comunicació d'actuació professional acredita l'advocat com a tal, sense que calga cap designació o nomenament del poder judicial o de l'administració pública.

4. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici del que estableixen l'Estatut del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i els altres acords intercol·legials que es puguen establir.

certesa dels documents aportats, mentre no es dispose de les compulses o legitimacions adients.

Article 12. Causes de denegació

Es denegaran les sol·licituds d'incorporació i reincorporació, si els qui les formulen es troben compresos en algun dels casos següents:

a) No complir amb els requisits d'incorporació o reincorporació, establits en els presents Estatuts.

b) Tindre algun impediment per a ser admés, per no haver aconseguit la majoria d'edat o per no posseir la nacionalitat espanyola, llevat dels casos de dispensa, o quan s'haguera produït la inhabilitació o suspensió expressa per a l'exercici de l'advocacia, en virtut de sentència o de resolució ferma.

c) Haver estat sancionat disciplinàriament, amb la suspensió de l'exercici professional o l'expulsió d'algun col·legi d'advocats espanyol o corporació equivalent, d'alguns dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu de 2 de maig de 1992, sense haver estat rehabilitat.

Article 13. Pagament de quota d'incorporació

1. El pagament de la quota d'incorporació es realitzarà en el moment de sol·licitar-la, però amb caràcter condicional, subjecte a l'autorització de la incorporació.

2. Si qui sol·licita la incorporació ho està en un altre col·legi, la quota d'incorporació que haurà de satisfer serà la mateixa que s'exigirà en el col·legi d'origen, als advocats pertanyents al Col·legi d'Advocats d'Alzira, per règim de reciprocitat.

Article 14. Col·legiació única

1. Els advocats incorporats en un altre col·legi d'advocats podran exercir a l'àmbit territorial del Col·legi d'Advocats d'Alzira, sense que se'ls puga exigir per aquest cap habilitació, ni el pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les exigibles als seus col·legiats per serveis que no es troben coberts per la quota col·legial. Tot això sense perjudici del deure de comunicació prèvia, regulat en l'article 15 d'aquests Estatuts.

2. Tot advocat incorporat al Col·legi d'Alzira podrà prestar els seus serveis professionals lliurement en tot el territori del Regne d'Espanya, a la resta dels estats membres de la Unió Europea i a altres països de l'àmbit ter-

e) Haver obtingut, quan procedisca, l'acreditació de l'aptitud professional a través de què es reconega la capacitat necessària per a l'exercici professional d'advocat.

Article 9. Requisits a omplir pels advocats pertanyents a altres col·legis

Sense perjudici que siga suficient la col·legiació en un sol col·legi, que serà el del domicili professional únic o principal, per a exercir en tot el territori del Regne d'Espanya, els qui pretenguen incorporar-se al Col·legi d'Advocats d'Alzira, si pertangueren amb anterioritat a un altre, hauran de presentar certificat del Consell General de l'Advocacia, acreditatiu de no figurar donat de baixa per falta de pagament en qualsevol col·legi d'advocats d'Espanya i de no haver estat objecte de correcció disciplinària, amb expressió precisa de quina va ser aquesta en cas afirmatiu.

Article 10. Autorització d'incorporació

1. Correspon a la Junta de Govern resoldre sobre les sol·licituds d'incorporació i reincorporació que es presenten, les quals seran aprovades, suspeses o denegades, prèvies les diligències i informes que procedisca, mitjançant una resolució motivada, que haurà de ser notificada a l'interessat en el termini de deu dies. Contra la resolució denegatòria o suspensiva de la sol·licitud de col·legiació o reincorporació, procedirà el recurs de reposició davant de la mateixa Junta de Govern, que haurà de ser interposat en el termini d'un mes, i haurà de ser resolt en el mateix període. Contra l'acord definitiu podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, d'acord amb el que disposa l'article 113.

2. No podrà denegar-se, en cap cas, l'ingrés en la incorporació als qui reuniten els requisits establits en l'article 8 d'aquest Estatut.

Article 11. Suspensió de sol·licituds

La tramitació de les sol·licituds d'incorporació i reincorporació serà suspesa en els casos següents:

a) Si el sol·licitant no acompanya els documents acreditatius de complir els requisits per a la seua col·legiació. La suspensió s'alçarà en el moment en què presente la totalitat d'aquests documents.

b) Si, a judici del secretari, hi haguera dubtes respecte de la legitimitat o

TÍTOL III
COL•LEGIACIÓ I EXERCICI DE LA PROFESSIONIÓ
CAPÍTOL PRIMER
ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE COL•LEGIAT

Article 7. Obligatorietat de col•legiació

Per a l'exercici de l'advocacia, els qui tinguen el seu domicili professional únic o principal en l'àmbit territorial del Col•legi, hauran d'incorporar-s'hi, la qual cosa els permetrà exercir en tot el territori espanyol en els termes de la llei estatal de col•legis professionals.

Article 8. Requisits de col•legiació

1. La incorporació al Col•legi d'Advocats d'Alzira exigirà els requisits següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea o de l'àmbit territorial d'aplicació de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, fet a Porto el 2 de maig de 1992 (BOE 21/1994, de 25-01-1994) llevat d'allò que es disposa en tractats o convenis internacionals, o dispensa legal.

b) Ser major d'edat i no estar sotmés en causa d'incapacitat.

c) Posseir el títol de llicenciat en Dret o els títols estrangers que, d'acord amb les normes vigents, siguen homologat amb aquells.

d) Satisfer la quota d'ingrés i les altres que tinga establides el Col•legi.

2. La incorporació com a exercent exigirà, a més, els requisits següents:

a) No tindre antecedents penals que l'inhabiliten per a l'exercici de l'advocacia.

b) No estar incurs en causa d'incompatibilitat o prohibició per a l'exercici de l'advocacia.

c) Formalitzar l'ingrés en la Mutualitat General de l'Advocacia de Previsió Social a prima fixa o, si fa al cas, en el Règim de Seguretat Social que corresponga d'acord amb la legislació vigent.

d) Declaració jurada de la persona sol•licitant, en què manifestarà si exerceix alguna funció o ocupació de les administracions públiques. En cas afirmatiu, expressarà la naturalesa i categoria de la seua funció o ocupació, i aportarà certificat en què expresse que no incorre en cap incompatibilitat amb l'exercici de la professió.

- n) Establir barems orientatius sobre honoraris professionals i, si fa al cas, el règim de les notes d'encàrrec o pressupostos per als clients.
- o) Informar i dictaminar sobre honoraris professionals, així com establir, si és el cas, serveis per al seu cobrament.
- p) Complir i fer complir als col·legiats, en quant afecte la professió, les disposicions legals i estatutàries, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials en matèria de la seua competència.
- q) Quantes altres funcions redunden en benefici dels interessos de la professió, dels col·legiats i de la resta de fins de l'advocacia.
- r) Participar en els processos i proves que s'establisquen per a l'acreditació de l'aptitud professional, a través de què es reconega la capacitat necessària per a l'exercici professional d'advocat.
- s) Les altres que disposen la legislació estatal o la Comunitat Valenciana.

d) Participar en matèries pròpies de la professió en els òrgans consultius de les administracions públiques, així com en els organismes interprofessionals.

e) Assegurar la representació de l'advocacia en els consells socials i patrons universitaris, en els termes establerts en les normes que els regulen.

f) Participar en l'elaboració dels plans d'estudis, informar de les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió, mantindre permanent contacte amb aquests; crear, mantindre i proposar a l'autoritat competent l'homologació d'escoles de Pràctica Jurídica i altres mitjans per a facilitar l'accés a la vida professional dels nous titulats, i organitzar cursos per a la formació i perfeccionament professional.

g) Ordenar l'activitat professional dels col·legiats; vetlar per la formació, l'ètica i la dignitat professionals i pel respecte degut als drets dels particulars; exercir la facultat disciplinària en l'orde professional i col·legial; elaborar els seus Estatuts particulars i les modificacions d'aquests, i sotmetre'ls a l'aprovació de l'administració Pública de la Generalitat, amb un informe previ del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats; redactar i aprovar el seu Reglament de Règim Interior, sense perjudici del control de legalitat per l'administració pública de la Generalitat, i la resta d'acords per al desenvolupament de les seues competències.

h) Organitzar i promoure activitats i serveis comuns, d'interés per als col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i altres d'anàlegs, inclòs l'assegurament col·lectiu de la responsabilitat civil professional.

i) Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats i impedir la competència deslleial entre aquests.

j) Adoptar les mesures conduents a evitar i perseguir l'intrusisme professional.

k) Intervindre, amb la sol·licitud prèvia, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que, per motius professionals, se susciten entre els col·legiats o entre aquests i els seus clients.

l) Exercir funcions d'arbitratge en els assumptes que els siguen sotmesos, així com promoure o participar en institucions d'arbitratge.

m) Resoldre les discrepàncies que puguem sorgir en relació amb l'actuació professional dels col·legiats i la percepció dels seus honoraris, mitjançant laude, a què prèviament se sotmeten de mode exprés les parts interessades.

TÍTOL II

FINS I FUNCIONS DEL COL•LEGI

Article 5. Fins del Col•legi

Els fins del Col•legi d'Advocats d'Alzira són els assenyalats amb caràcter general en l'Estatut General de l'Advocacia i del Consell Valencià de Col•legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana i, en particular, els següents:

- a) L'ordenació de l'exercici de la professió i la seua representació exclusiva.
- b) La defensa dels drets i interessos professionals i assistencials dels col•legiats.
- c) La formació professional permanent dels col•legiats.
- d) El control deontològic i l'aplicació del règim disciplinari, en garantia de la societat.
- e) La col•laboració en el funcionament, promoció i millora de l'administració de justícia.

Article 6. Funcions del Col•legi

Correspon al Col•legi d'Advocats d'Alzira, per al compliment dels seus fins, l'exercici de les funcions que, amb caràcter general, s'indiquen en l'Estatut General de l'Advocacia i del Consell Valencià de Col•legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana i, en particular, les següents:

- a) Ostentar la representació que establisquen les lleis per al compliment dels seus fins i, especialment, la representació i defensa de la professió davant de l'administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en quants litigis i causes afecten els drets i interessos professionals i als fins de l'advocacia; exercitar les accions penals, civils, administratives o socials que siguen procedents, així com per a utilitzar el dret de petició d'acord amb la Llei.
- b) Informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, els projectes de lleis que es presenten a les Corts i de normes del Consell en matèria de dret públic i privat, i Administració de Justícia, que es referisquen o afecten el Col•legi i l'exercici de l'advocacia.
- c) Organitzar i gestionar els serveis d'assistència jurídica gratuïta i quants altres d'assistència i orientació jurídica puguen estatutàriament crear-se.

vocats' i a la inferior Alzira. I es podrà utilitzar indistintament un emblema o l'altre. Sense perjudici d'això, la Junta de Govern del Molt Il·lustre Col·legi d'Advocats podrà actualitzar i modificar l'esmentat escut, previa consulta a la Junta General de Col·legi.

3. El Col·legi s'acull al patrocini secular de santa Maria, en la seua Immaculada Concepció.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació, naturalesa i àmbit territorial

1. El Col·legi d'Advocats d'Alzira és una corporació de pret públic, emparada per la Constitució, les normes bàsiques de la Llei Estatal de Col·legis Professionals i per la Llei de Col·legis Professionals de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que és regida per l'esmentada normativa legal i la resta de d'aplicació, pels seus Estatuts i pels Estatuts del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana i l'Estatut General de l'Advocacia.

2. La competència territorial del Col·legi d'Advocats d'Alzira és el partit judicial d'Alzira.

3. En cas de modificació futura dels partits judicials que afecte l'actual d'Alzira, l'àmbit territorial del Molt Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira comprendrà en tot cas els municipis que actualment formen part del partit judicial i que s'inclou en la disposició adicional única dels presents Estatuts.

Article 2. Domicili

El Col·legi d'Advocats d'Alzira té la seua seu a Alzira, plaça del Sufragi núm. 9.

Article 3. Integrants

El Col·legi d'Advocats d'Alzira s'integra, sense cap limitació, pels qui, reunint les condicions d'aptitud i no estant sotmesos en cap tipus d'impediments, i previ compliment dels requisits, hagen estat admesos.

Article 4. Tractament i emblemes

1. El Col·legi d'Advocats d'Alzira tindrà el tradicional tractament d'il·lustre.

2. El seu emblema tradicional està constituït per l'escut d'armes de la ciutat d'Alzira, amb un filacteri que recorre ambdós costats de l'escut i la seua part superior amb la llegenda 'COLEGIO DE ABOGADOS DEL PDO.'i, en la base, la paraula ALZIRA. Tot i que el seu emblema actual està constituït per l'escut d'armes de la ciutat d'Alzira, emmarcat en la balança de la justícia, i inclou a la seua part superior la llegenda 'Il·lustre Col·legi d'Ad-

**ESTATUTS DE L'IL·LUSTRE
COL·LEGI D'ADVOCATS
D'ALZIRA**